



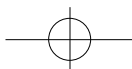
EL PROCESO INSURRECCIONAL DE ABRIL:
ESTRUCTURAS MATERIALES Y SUPERESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS DE LOS CAMPESINOS REGANTES
EN EL VALLE CENTRAL COCHABAMBINO

LORGIO ORELLANA AILLÓN*

LA MAÑANA del 9 de abril de 2000, en la plaza principal de Cochabamba, la policía recogió el cadáver de un joven marginal, que pendía de una viga atravesada en un rincón de la Catedral Metropolitana, en la plaza principal de Cochabamba. Algunos lo conocían como el *Campanas*, quien junto a un grupo de *polillas* moraba en los rincones de la iglesia durante los días de la Guerra del Agua. Tenía la función de tocar el campanario en caso de avizorar la aproximación de las fuerzas represivas. En la prensa se dijo que el joven había decidido acabar su vida colgado en el campanario de la iglesia. Pero en realidad era una viga donde apareció, por voluntad suya o de terceros. Nunca se supo.

El *Campanas* fue uno de los tantos “guerreros del agua” que había formado barricadas en las cuatro esquinas de la plaza para resistir al ejército. Junto a miles de desposeídos, en las calles, había vivido la formación de un nuevo poder que emergía de la movilización

* Docente Investigador del Taller de Movimientos Sociales en la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, Bolivia. Investigador Asociado al Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la UMSS y becario JOVAGRA del programa CLACSO-Asdi para investigadores jóvenes.





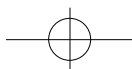
RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

directa de las masas; junto a miles de harapientos expulsó a una transnacional; y por el lapso de una semana “los nadies” se convirtieron en gigantes. A través de sus asambleas y cabildos, miles de trabajadores, comerciantes, campesinos, vecinos, empezaron en los hechos a sustituir el poder del Estado. Los “guerreros del agua” de la plaza eran los héroes de este movimiento, mimados por comerciantes minoristas y vecinos solidarios, que les traían comida en cantidades, y que probablemente, en otras circunstancias, los hubieran linchado por robo.

Trotsky dijo una vez que toda política busca a sus propios individuos. Antes que él, y en un sentido más general, Vico había añadido: “y si no los encuentra, se los inventa”. Los “guerreros del agua” de la plaza, aquellos muchachos que en otras condiciones hubieran cortado el rostro de un transeúnte por unos billetes, fueron criatura de la insurrección de abril. Por unos días, los *lumpen* fueron transformados en revolucionarios. No fue un hecho casual. Aquellos que nada tenían que perder eran los que menos temían a la muerte; eran quienes con mayor decisión se enfrentaban a las balas militares. Pero además lo hacían con tanta energía porque el proceso insurreccional les había otorgado un sentido de vida: no eran la “escoria” de la sociedad, eran los “guerreros del agua”. Claro que después historias como la del *Campanas* terminarían archivadas y olvidadas en las oficinas de la Policía Técnica Judicial.

El drama de que abril siguiera siendo, porque después de él nada había, era que varios jóvenes marginales no quisieron abandonar la plaza aun cuando el conflicto ya había terminado; se obstinaron en seguir combatiendo. La noche del 10 de abril, luego de la ruptura del contrato con la transnacional Aguas del Tunari, la prensa entrevistó a un muchacho solitario, con el rostro encubierto, que se resistía a irse hasta que el Parlamento aprobara las modificaciones a la Ley 2.029. Vivir en combate la intensidad de la Guerra del Agua, salir momentáneamente de las miserias vividas individualmente para darle un sentido épico a la vida, sin importar si se la pierde en el intento. Allí, “los nadies” habían sido la nata del movimiento. Se necesitó un abril para que lo fueran, y se necesitarán grandes abrils en el país para destruir definitivamente los privilegios clasistas de unos pocos, que brotaron de la miseria de los muchos que corren la misma suerte de el *Campanas*.

En cierta forma, este trabajo nace del mismo dilema que en algún momento se plantearon aquellos compañeros que no quisieron dejar la plaza principal: continuar abril. Pero dicho impulso se fusio-





LORGIO ORELLANA AILLÓN

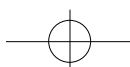
na aquí con un intento de explicación racional sobre las circunstancias que lo hicieron posible, justamente para ayudar a planificar de manera efectiva su continuación. Empezamos aquí entonces por el análisis de la columna vertebral de la Guerra del Agua: los campesinos regantes; sus formas de producción y reproducción social; las experiencias de sus luchas en su sector más combativo, el Valle Central. Y concluimos con el análisis de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, un órgano de poder impulsado por los mismos regantes, que después adquiriría una dimensión regional insospechada por los propios dirigentes campesinos.

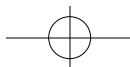
Antecedentes históricos sobre la formación de los sistemas de riego y la Guerra del Agua en el Valle Central cochabambino

Múltiples síntesis de diversos procesos históricos, amalgama de sistemas de riego provenientes de la época de las haciendas, y cambios en los sistemas vinculados a la repartición de tierras y derechos de agua, como parte del proceso revolucionario iniciado en 1952 que en los valles rompió la gran propiedad sobre la tierra y el monopolio de las haciendas sobre el agua, junto a modificaciones y transformaciones posteriores, producto de la ampliación de los sistemas a través del trabajo colectivo y/o la construcción de nuevas estructuras de riego, con la intervención de ONGs y organizaciones estatales; producto de estos procesos históricos son los sistemas de riego en el Valle Central de Cochabamba.

Uno podría iniciar una reconstrucción de la estructura de clases durante el período de las haciendas en el Valle Central; la formación y el desarrollo de la pequeña producción parcelaria; o la superposición de ambos modos de producción, a partir de una “arqueología” en gran parte de estos sistemas de riego¹, medios de trabajo que constituyen indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales fueron producidos (Marx, 1985: 218) y que a su modo tienen el sello de los antagonismos que dichas relaciones generaron.

¹ “Por detrás de la historia atropellada de los gobiernos, de las guerras y de las hambres, se dibujan unas historias, casi inmóviles a la mirada, historias de débil declive: historia de las vías marítimas, historia del trigo o de las minas de oro, historias de la sequía y la irrigación, historia de la rotación de cultivos” (Foucault, 1995: 4). Si bien nosotros apreciamos la obsesión de Foucault por el detalle, somos conscientes de que él puso en duda las posibilidades de totalización (Foucault, 1995: 12), dentro de las cuales podrían incluirse las “relaciones sociales de producción”.





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

Ancestrales disputas por el agua al iniciarse la expropiación de tierras comunales durante la formación de las haciendas en el Valle Central a lo largo del siglo XVI², pasando por la Ley de *exvinculación* de tierras comunitarias (consagrada por gobiernos republicanos durante el último tercio del siglo XIX³) constituyen la antesala de la formación y el desarrollo de conflictos por la tierra y el agua en el Valle Central cochabambino.

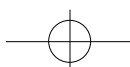
Las luchas de clases entre campesinos y hacendados dejaron su huella en la formación de los sistemas de riego en la región. La guerra campesina de 1953⁴ obligó al gobierno del MNR a promulgar la Ley de Reforma Agraria, que en Sipe Sipe⁵ modificó los privilegios de las haciendas en la distribución del agua: “en 1940, la zona de valles de Sipe Sipe mantenía treinta y dos haciendas y diez comunidades llamadas originarias. La Reforma Agraria de 1953 afectó a las tierras de hacienda en un 50% aproximadamente y vendió un 50% de las tierras y aguas a los ex-colonos de las mismas, siendo en promedio una hectárea de terreno por colono, con derechos de agua que variaban de

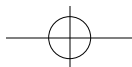
2 “Los primeros conflictos entre los hacendados y las comunidades se produjeron en torno al control del suministro del agua y no en torno a disputas por el dominio de la tierra” (Gordillo y Jackson, en Bustamante, 1997). Según se halla registrado en documentos de la alcaldía de Cochabamba, revisados por Rocío Bustamante, hubo conflictos sobre las aguas del río Molinos, río Khora que atraviesa el Valle Central, entre los indios y los hacendados de la zona Sur. “Don Antonio Miranda, propietario de tierras de Capacachi y don Luis Moya, que tenía terrenos en Colcapirhua, argumentan en sus peticiones que los indios de Tiquipaya aprovechan “ocho días que tienen de mita y se les da... y pueden gozar de otros cuatro días de río y quebrada del apote, con otros muchos manantiales y puquios que tienen en las dichas sus tierras” (A.H.M.C. Exp. Col. 22, en Bustamante, 1997: 64). Los expedientes referidos a 1663, 1679 y 1741, revisados por Bustamante, dan cuenta de un paulatino proceso de expropiación de derechos de aguas de los campesinos, por parte de los hacendados. Durante las Revisitas republicanas en la región, de un turno de 22 días, los hacendados tenían acceso al agua 15 días, mientras que los indígenas apenas 7. Estos cortes habían ido realizándose gracias a los censos de los visitantes (Bustamante, 1997: 65-66).

3 “Entre 1876 y 1884, período en que los Revisitadores Manuel Virreira y Delfín Aze, procedieron a la Exvinculación de tierras comunales en Tiquipaya, se confirmaron 211 asignaciones que correspondían aproximadamente a 116 hectáreas, y declararon vacantes 35 asignaciones, es decir 134 hectáreas; las cuales fueron alquiladas y posteriormente vendidas en remates públicos, generalmente a mestizos que de esta forma lograron constituir pequeñas haciendas en el antiguo pueblo real. Así la Revisita iniciada en 1876, fue el proceso que más eficazmente permitió la penetración de propietarios de haciendas dentro de las tierras comunales bajo riego. Este acontecimiento, al otorgar títulos que incorporaban a sus poseedores en un régimen civil, inició un proceso de fraccionamiento de la propiedad por causa de herencias y compraventas sobre los cuales el Estado tenía durante algún tiempo cierto control” (Bustamante, 1997: 75).

4 Para un análisis de la agitación revolucionaria campesina en 1953, pueden verse Lora (1998) y Gordillo (2000).

5 Sipe Sipe es la segunda sección municipal de Quillacollo; a su vez, la segunda provincia del Departamento de Cochabamba. Es el Valle Central (Ver Mapa N° 1).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

acuerdo al sistema de riego (de treinta a noventa minutos en turnos de mita por hectárea) en vertientes o ríos” (Salazar, 1999: 54).

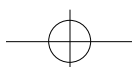
En El Paso⁶, un levantamiento campesino armado expulsó a los hacendados, preparando las condiciones para el aprovechamiento de las lagunas en el sector: “El lugar llamado Jallpa Cueva era de la hacienda de Molle Molle, de propiedad de los Salamanca... Entonces avanzaron en ese tiempo ellos. De por sí se adueñaron de los terrenos. No había ninguna ley, porque esta tierra había sido repartida por colonizadores extranjeros que correspondía a El Paso... Entonces, cuando triunfó el 9 de abril, inmediatamente han comenzado a formar sindicatos en cada hacienda y en cada lugar, ellos querían ser autoridades sindicalistas porque ellos pensaron que los patrones les iban a matar a los campesinos, por eso han formado los sindicatos para defenderse... Entonces, los campesinos se han levantado gravísimo. En cada lugar tenían armamento que ocultaban debajo de las camas de chala, techos. Sabiendo esta noticia, los patrones se salieron o se han escapado por su propia voluntad, porque si lo agarraban a los patrones lo mataban o lo llevaban a la central, lo detenían... Con la expulsión de los hacendados de estas zonas, las lagunas quedaron libres o vacantes” (Gerbrandt y Hoogendam, 1998: 169-170).

Y las cinco haciendas que existían alrededor de Tiquipaya fueron expropiadas y distribuidas entre sus colonos. Según Bustamante (1997: 84), este proceso tuvo rasgos diferentes a las expropiaciones en el resto del país, producto de la formación de piqueros y pequeños propietarios antes de 1953, debido a la adquisición de tierras sobrantes durante la última Revisita que se desarrolló entre 1876 y 1884⁷. En realidad, en vastas extensiones del Valle Bajo y el Valle Central el terreno de las haciendas estaba muy fragmentado. En tales sectores, los pequeños propietarios se orientaron fundamentalmente a romper el monopolio del agua para riego que tenían los hacendados, y del cual dependían (Jackson, 1994, cita en Gordillo, 2000: 43-44).

El Valle Central fue escenario de una importante agitación política a inicios de los años cincuenta. Respaldado por la Central Obrera Boliviana (COB), el antiguo sindicalista minero Sinforoso Rivas,

6 Cantón del Valle Central de Cochabamba.

7 Durante el período colonial y republicano, las Visitas y Revisitas eran procedimientos administrativos, ligados a la realización de censos de la población indígena en las comunidades y revisión de la validez de los títulos que certificaban la posesión de las tierras. Normalmente, estas Visitas o Revisitas declaraban terrenos sobrantes, sin posesión legítima, siendo arrendados o rematados para incrementar los ingresos fiscales (Bustamante, 1997: 70).



RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

quien se convirtió en caudillo campesino, fundó en Sipe Sipe el 6 de agosto de 1952 la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. “Autoridades de la policía y del Ejército formulaban frecuentes declaraciones respecto a la labor de ‘agitación comunista’ que se desarrollaba en las áreas rurales del país” (Gordillo, 2000: 42). La experiencia sindical campesina dejaría su huella en las nuevas organizaciones de riego.

El levantamiento campesino destruyó el monopolio de las haciendas sobre el agua, y aunque la ley de 1953 ratificó los antiguos sistemas de gestión de los recursos hídricos⁸, consolidando el derecho y las formas de distribución utilizadas hasta entonces, en su mayoría los privilegios de los terratenientes desaparecieron. Con la Reforma Agraria se conformarían “comunidades de ex-hacienda y sus sindicatos. Estas unidades organizativas, en la mayoría de los casos, asumieron como parte de sus responsabilidades la gestión de las aguas de riego a nivel comunal, representando a la comunidad dentro del sistema. Los sindicatos también utilizaron su potencial organizativo para efectuar una serie de trabajos de mejora e incluso de rehabilitación completa de sistemas antiguos” (Bustamante, 1997: 86).

Durante los siguientes cuarenta años el Valle Central de Cochabamba experimentó un acelerado proceso de urbanización⁹ vinculado a la expansión del capitalismo en sectores productivos urbanos del Valle, como la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios, proceso relacionado a la disminución de la producción campesina y el desarrollo de los sistemas de riego en el Valle Central (Vargas, 2000: 183).

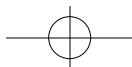
Mientras en 1950 el 72% de la población en la provincia de Quillacollo se distribuía en sus comunidades, en 1992 la población urbana llegó al 59% del total¹⁰, ocasionando el incremento espacial de los centros urbanos¹¹. Paralelamente, entre los años sesenta y ochenta

8 “Se mantiene el sistema de mitas o turnos de regadío empleados a tiempo de dictarse la presente disposición” (cita en Bustamante, 1997: 83).

9 “El crecimiento de la población y su concentración en áreas urbanas es notable en los 40 años que van desde 1950 a 1992: mientras la población rural crece solamente en 62%, la población urbana se cuadruplica. Las tasas anuales de crecimiento de los centros poblados de Cochabamba y sus alrededores están entre las más altas del país: 86% para Quillacollo [...], 45% para Cochabamba” (Vargas, 2000: 193).

10 “Las ramas de actividad económica más importante de los migrantes, están vinculadas a la expansión económica urbana: la manufactura, los servicios, el comercio y la construcción son los sectores que atraen a los migrantes” (Vargas, 2000).

11 Sobre las consecuencias del desarrollo urbano de Tiquipaya en las áreas rurales, estas “varían desde



LORGIO ORELLANA AILLÓN

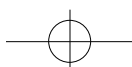
la contribución de la actividad agropecuaria en el PIB cayó del 32% al 26%. Si se excluye el impacto de la producción de la coca, entre 1988 y 1995 la producción agropecuaria cayó del 15,5% al 11%, ocasionando una importante disminución de la población empleada en este sector (Vargas, 2000: 197).

La generalización del minifundio, producto de la Reforma Agraria, ocasionó la progresiva parcelación de la tierra en los valles. “Hacia fines de los ‘70 cerca del 70% de los predios agrícolas tenían una extensión menor a la hectárea y alrededor del 20% de las propiedades variaban entre 1 y 2 ha.... En los ‘90, la propiedad agrícola familiar en el Valle Central no alcanza el promedio de media hectárea, debido a la práctica de la división hereditaria de las parcelas” (Dames y Moore, cita en Vargas, 2000: 197-198).

La contradicción entre las pequeñas extensiones de tierra y la creciente demanda de productos agropecuarios en las manchas urbanas, fue enfrentada a través de la diversificación de la producción, incrementando en este sentido la demanda de agua para riego y crianza de animales. Campesinos lecheros a la vez que horticultores, criadores de chancho a la vez que fruticultores, articulados al proceso de reproducción capitalista por la vía del mercado, requerían de mayores cantidades de agua para sostener una explotación intensiva de la tierra. La expansión y el desarrollo de complejas redes de riego y abastecimiento de agua respondían a tal necesidad.

Como parte de la subsunción general de la capacidad de trabajo rural a la valorización del capital, se subordinó fuerza de trabajo campesina al proceso de producción capitalista lechero en el Valle Central a través del intercambio, formas que se intensificaron durante los últimos años en sectores considerables de la región. En la actualidad, alrededor de 3.101 productores campesinos entregan leche cruda a la

la mayor contaminación ambiental hasta los constantes conflictos entre campesinos y vecinos de los barrios y urbanizaciones. Esto es particularmente cierto para los usuarios de agua que ven sus canales y tomas de agua constantemente destruidas o ‘cercadas’ por propiedades urbanas, dificultando así la conducción del agua y el mantenimiento de la infraestructura. En el caso de usuarios de vertiente el problema es principalmente la perforación de pozos domésticos, y la contaminación de las aguas. Por otro lado el hecho de que ahora existan más zonas a las cuales es necesario proveer agua potable, ha provocado que tanto la Alcaldía de Tiquipaya como SEMAPA, hagan ‘avances’ en sentido de acceder a las mayores cantidades de agua, por supuesto a costa de los derechos de los regantes” (Bustamante, 1997: 92). Salazar (1999: 82-85) también hace referencia al impacto ecológico de un centenar de pequeñas industrias de material de construcción asentadas en Vinto y Sipe Sipe; de granjas avícolas y porcinas que desechan material contaminante en los ríos de la región; y empresas constructoras que explotan piedra, arena y grava, desbordando las aguas de los ríos y contaminando el agua con aceite y desechos.





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

Planta Industrializadora de Leche (PIL) de propiedad transnacional. “El 95% son productores pequeños que cubren el 75% de la demanda de leche cruda” (Vargas, 2000: 199). Se trata de pequeños propietarios de ganado vacuno y terrenos de pastoreo para la alimentación animal: capacidad de trabajo y medios de producción que formalmente aparecen como propiedad de los pequeños productores parcelarios, pero que esencialmente se hallan al servicio de la valorización capitalista.

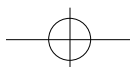
Paralelamente, los campesinos del Valle Central producen zanahoria, durazno, arveja, maíz, trigo, cebada, destinados al mercado urbano de Cochabamba, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe. Crían chanchos que se venden en los mercados para el consumo familiar y la industria de embutidos. Los precios de los productos agropecuarios, de los más bajos en América Latina, constituyen el complemento dialéctico de un salario mínimo que en las ciudades oscila alrededor de los sesenta dólares mensuales. Es la forma en la que el capital explota la fuerza de trabajo del campesino (Bartra, 1979).

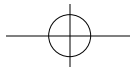
El acelerado proceso de urbanización por un lado, y el desarrollo de la explotación intensiva de la tierra, característica del minifundio, por otro, propiciaron el incremento de la demanda de agua, necesaria para riego, indispensable como medio de trabajo y medio de consumo individual tanto en procesos capitalistas y no capitalistas de producción, necesidades en contradicción que fueron respondidas con la fuerza compulsiva del Estado para garantizar la perforación de pozos profundos y semi-profundos en el Valle Central de Cochabamba con el objeto de garantizar la provisión de agua a la ciudad y frenar la protesta campesina.

Los conflictos emergentes de la perforación de pozos en el Valle Central desde los años setenta, implementada por instituciones estatales y resistida por los campesinos, incluidas las Guerras por el Agua de los noventa y del 2000, a su manera, expresan la irresuelta contradicción campo-ciudad en formaciones sociales capitalistas de desarrollo combinado como las andinas: inconclusos procesos de acumulación originaria que no culminaron la expropiación del productor directo de los medios de producción.

Como parte de este fracturado proceso, durante la dictadura del General Hugo Bánzer Suárez, entre 1976 y 1977, la empresa Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), parte de un Comité de Emergencia¹² cuyo objetivo era resolver la escasez de agua en

12 Formado por la Corporación de Desarrollo Cochabamba, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad y Geólogos Bolivianos (Assies, 2000; traducción nuestra).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

Cochabamba debido a la falta de lluvias, “perforó una batería de 10 pozos semiprofundos en el área de Vinto... habiendo obtenido un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo” (Assies, 2000; traducción nuestra). Frente a reclamos de los pobladores, SEMAPA se comprometió a proveer con agua a los habitantes del lugar y aseguró que las perforaciones no disminuirían el nivel de agua de sus pozos.

En ciertos sectores del Valle Central la población accedió, y en otros hubo conflictos: “[E]n algunos casos no hubieron problemas serios, en otros, como en el caso de Capacachi, se llegó a destruir cultivos, expropiar tierras y se persiguió a líderes campesinos” (Durán, Hoogendam y Salazar, 1998: 14) que resistieron las excavaciones. Tan pronto como las perforaciones concluyeron, se produjeron filtraciones de agua de los pozos campesinos y vinieron los reclamos de la población, afrontados con compromisos que jamás se cumplieron. “De ahí que para muchos agricultores, SEMAPA fue adquiriendo una imagen negativa y contraria a sus intereses en el Valle Central” (Durán, Hoogendam y Salazar, 1998: 14).

Producto de esta experiencia, y ante el conocimiento de que SEMAPA buscaba realizar nuevas perforaciones de pozos en el sector, esta vez en 1992, se conformó un Comité de Defensa de los Recursos Hídricos de Vinto, apoyado por autoridades municipales y organizaciones locales de Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe y Colcapirhua para enfrentar la perforación de pozos, hecho que ocasionó el desistimiento temporal de SEMAPA¹³.

Las contradicciones generadas por demanda de agua en la ciudad continuarán con la implementación de la Política del Plan Maestro de Agua para Cochabamba, elaborado por SEMAPA y financiado por un consorcio formado por tres empresas extranjeras (Assies, 2000; traducción nuestra), que consistía en la provisión de agua potable para la ciudad mediante la perforación de pozos profundos y semiprofundos (600 y 250 metros) en el Valle Central (Fernández, 2000). Autoridades municipales, cívicas y subcentrales campesinas confor-

13 El mismo año, 1992, los campesinos de Viloma vivieron una experiencia relacionada a los proyectos de diseño de un tajamar y un canal revestido en la cuenca, por el municipio de Sipe Sipe, que empezó a construirse sin consulta alguna. “La movilización de las 24 comunidades que componen el sistema no se dejó esperar, y se dio un ultimátum para parar las obras; la Alcaldía y la empresa constructora no respondieron adecuadamente a un proceso de negociación. En asamblea de delegados de Agua, juez general de Aguas y sindicatos agrarios de las 24 comunidades, se determinó y procedió a destruir las obras de la excavación y el canal revestido. En la actualidad, queda parte del canal totalmente tapado y en completo abandono” (Salazar, 1999: 80).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

maron a fines de septiembre un Comité de Defensa para impedir la perforación de pozos y organizaron una marcha desde Vinto, concentrando alrededor de diez mil personas en el Valle Bajo.

Una vez que SEMAPA anunció el inicio de perforaciones en la comunidad de Mallco Ch'api, varias comunidades amenazaron bloqueando la carretera entre Cochabamba y Oruro (Assies, 2000; traducción nuestra). A cambio de la perforación de pozos SEMAPA ofreció instalar sistemas locales de agua potable, propuesta que fue rechazada. Durante noventa días los campesinos bloquearon la entrada a la cuenca Viloma para evitar el ingreso de SEMAPA. "Teníamos que dormir en el mismo camino, tumbamos los árboles... en la salida de Viloma"¹⁴, contaba un dirigente de la cuenca.

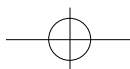
Para salir de este conflicto, SEMAPA, respaldado por el Gobierno Municipal de Cochabamba, optó por negociar políticamente con los gobiernos municipales la perforación de pozos profundos y expropiación de tierras comunales. Tal fue el caso de Sipe Sipe, donde el arreglo entre SEMAPA y la alcaldía generó la movilización de todas las organizaciones comunales, que forzó a los concejales y alcalde de este municipio a romper el compromiso político y renunciar a sus cargos (Durán, Hoogendam y Salazar, 1998: 14).

En un intento de negociación, el entonces ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín viajó a Cochabamba para encontrarse con representantes de Sipe Sipe. "Pocos días después estuvo a punto de ser tomado como rehén por una turba molesta" (Assies, 2000; traducción nuestra).

Luego de varios intentos de transacción, la perforación de un pozo de 600 metros se inició el 5 de abril de 1995, en El Paso, sobre un terreno perteneciente al ejército, bajo protección policial. El estado de sitio decretado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada como respuesta a una huelga convocada por la Central Obrera Boliviana y la huelga de hambre del magisterio facilitó el arresto de dirigentes campesinos que habían activado contra la perforación de pozos.

En julio de 1996 SEMAPA anunció su éxito en las perforaciones, indicando que era capaz de incrementar la provisión de agua potable para Cochabamba en 100 litros por segundo. Durante los últimos meses de 1997 SEMAPA dio a conocer sus nuevos planes para perforar otros diez pozos semi-profundos en Vinto y El Paso.

14 Testimonio de una asamblea de campesinos regantes de la cuenca Viloma, 15 de noviembre de 2001.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

El 10 de marzo de 1998, SEMAPA no sólo inició perforaciones en tierras pertenecientes al ejército, sino que pidió a la Superintendencia de Aguas autorización para perforar en otras comunidades. “A mediados de junio, la población de la comunidad de Ironcollo forzó la salida de ingenieros de SEMAPA y un contingente militar, quienes habían tomado un terreno para empezar a perforar” (Assies, 2000; traducción nuestra). El Consejo Municipal de Cercado demandó a la prefectura garantías para continuar el proceso de perforación de pozos y el Prefecto amenazó con usar la fuerza pública.

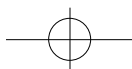
En Cochabamba, una Asamblea de la Cochabambinidad organizada por el Comité Cívico se pronunció a favor de la perforación de pozos “si fuera necesario por la fuerza”. El mismo mes de junio, el recientemente elegido presidente Hugo Bánzer Suárez y el ministro de Defensa Fernando Kieffer prometieron protección militar para la perforación de pozos (Assies, 2000; traducción nuestra). La política del Plan Maestro de Agua para Cochabamba permitiría la perforación de 18 pozos en el Valle Central de Cochabamba (Fernández, 2000).

A raíz de la perforación de pozos y la explotación de millones de metros cúbicos de agua anualmente descendieron el nivel de humedad del suelo y los niveles de las aguas subterráneas, produciendo en comunidades de El Paso resquebrajamiento del suelo, hundimientos y hoyos muy profundos (Fernández, 2000). Desde 1993, en los alrededores de la cuenca del río Chocaya las lagunas y vertientes se habían secado, sin reaccionar hasta la fecha, por el descenso de los acuíferos.

Al principio, las perforaciones se desarrollaron en un contexto de luchas campesinas aisladas, resistencias localizadas, inefectivas para enfrentar al Estado, “la violencia concentrada y organizada de la sociedad” (Marx, 1986a: 94). Desde el inicio de las luchas por el agua la dispersión de los campesinos condicionó el hecho de que no pudieran ofrecer una resistencia unificada y contundente a las perforaciones, que se desarrollaron con relativo éxito. Un contradictorio proceso de articulación y organización acompañaría a las distintas luchas contra las acciones de SEMAPA.

Atomizados en “lealtades locales” (Quijano, 2000: 171), los campesinos regantes del Valle Central tradicionalmente cayeron con relativa facilidad en las redes prebendales tejidas por los diversos partidos de turno que ocuparon las alcaldías¹⁵. Sus mismos actos de protesta

15 Rocío Bustamante recogió el siguiente testimonio referido a los sistemas de riego en Tiquipaya: “Si don Hans Stege, ha sido candidato del MNR, él es presidente de Lagun Mayu [un sistema de riego], yo

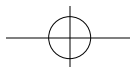


RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

contra la perforación de pozos fueron fácilmente reorientados, y finalmente dirigidos por las alcaldías como consecuencia de la cooptación política de sus dirigentes y ante la ausencia de una dirección única de los regantes. Sus reclamos fueron limitados, pues no tenían una organización que representara a todos los usuarios de pozos del Valle Central (Durán, Hoogendam y Salazar, 1998: 15).

Durante el conflicto de los pozos profundos, que se desarrolló entre 1994 y 1996, por primera vez comunidades campesinas y organizaciones de regantes unieron sus fuerzas, medida que tendió a incorporar a una vasta cantidad de comunidades del Valle Central, al saber que las perforaciones arriesgaban a la región en su conjunto. Durante el conflicto de 1997/1998 los campesinos de Sipe Sipe comprenderían esta realidad, evidenciando que su situación en la parte baja del Valle los volvía dependientes del uso acuífero en Vinto y El Paso. Así, durante el conflicto de 1998, “La perspectiva de la perforación de los pozos ha impulsado (por primera vez) mayor cohesión en la organización de los regantes, con el resultado de que el tema de la perforación de pozos volvió a ser un tema regional, donde ya no es posible encontrar soluciones locales. Esto implica que para perforar en El Paso o Vinto, ya no basta que los campesinos del lugar estén de acuerdo, porque también

soy presidente de Chankas-Sirpita, Saúl Cruz es presidente de Chankas Montecillo, él no puede decidir el proyecto de nuestra laguna, que en este momento está bien debatido y gracias a los políticos, tal vez que no nos aprueben, son 360.000 dólares, tenemos que hacer nosotros, si es el MNR, el Stege que lo defina lo que es de él, pero no de nosotros” (entrevista a Mario Oporto, en Bustamante, 1997: 103). Testimonios recogidos por Bustamante grafican el desarrollo político en los sistemas de riego de Tiquipaya. Desde sus inicios la Asociación de los Sistemas de Riego de Tiquipaya y Colcapirhua tuvieron injerencia política de partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario. En períodos de elecciones del Comité Cívico o durante las elecciones municipales, la dirección fue el escenario de pugnas internas, muchas veces a partir de intereses personales; pugnas por intereses cupulares de miembros de distintas tiendas políticas, que en resumidas cuentas recurrían al transfugio político para conservar ciertos espacios de poder. En muchos casos, los espacios de poder al interior de la ASIRITIC partían de la injerencia de los partidos políticos al interior de los sistemas de riego. En el caso de la cuenca La Llave, una de nuestras entrevistadas nos relataba que el actual alcalde “con el revestimiento del canal ha colaborado para que votemos por él” (entrevista a doña Francisca González de Alcocer, usuaria del pozo Crucero y la cuenca La Llave, Vinto, noviembre de 2001). Según comentaba doña Francisca, el actual alcalde, a través de regalos “compró” a su dirigente: “Y nos han obligado los dirigentes para ir a votar... no vamos a dar agua dicen, vamos a castigar con el riego dicen, de esa manera una tiene que ir”. En el caso de la comunidad de Mallco C’hapi, una asamblea de los accionistas de pozos reunidos el 23 de septiembre definieron: “Con respecto a las elecciones municipales todos los socios decidimos apoyar al ingeniero Carlos Fernández puesto que él habría defendido nuestros pozos desinteresadamente. También por unanimidad todos los socios quedaron en hacerse inscribir a la notaría electoral y su agua recibirán presentando su carnet electoral y votado después de las elecciones y si no tuvieran no dar su turnado de agua. Para lo cual el notario va a venir a la escuela el día martes de 8 de la mañana todo el día” (Libro de Actas de la Comunidad de Mallco Chapi, 11 de abril de 1998; respetamos su ortografía).



LORGIO ORELLANA AILLÓN

se necesita el consenso de otras regiones. Esta extensión del territorio dificulta las iniciativas de negociación, y demanda de los usuarios mayores esfuerzos para elaborar mecanismos de representación adecuados” (Durán, Hoogendam y Salazar, 1998: 17).

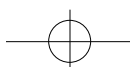
Un año después se formó la Federación Departamental de Regantes en Tiquipaya, la FEDECOR, como parte de una serie de seminarios, talleres, reuniones de cuencas y pozos impulsadas por la Asociación de Sistemas de Riego de Colcapirhua y Tiquipaya (ASIRITIC) y ONGs de financiamiento holandés como el PEIRAV, que desde años atrás venían planificando la formación de una organización de regantes¹⁶. Desde entonces los campesinos regantes tendrán un órgano regional que les permitirá enfrentar con mayor cohesión las movilizaciones de noviembre de 1999, febrero y abril de 2000.

Estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle Central de Cochabamba

Junto a los diversos procesos de trabajo colectivo que dieron lugar a los sistemas de riego en el Valle Central cochabambino, están las luchas por la utilidad, el uso, el goce, el disfrute del agua como elementos de sus fisonomías. Tras la apropiación del agua como componente de riego de la pequeña parcela o la hacienda, estaba la lucha entre piqueros y hacendados por su distribución. Junto a la expropiación y parcelación de la hacienda encabezada por los sindicatos campesinos vino la división de los derechos de agua que correspondían al patrón.

Si bien la gran propiedad sobre la tierra, que determinó el monopolio del agua, y la existencia de piqueros, arrenderos y “pongos”, por otro lado, condicionaban respectivamente una determinada

¹⁶ La Asociación de los Sistemas de Riego de Tiquipaya y Colcapirhua se formó en función del Proyecto de Riego Tiquipaya, asumiendo como uno de sus objetivos centrales la protección de las áreas agrícolas en la zona. Desde su fundación, “ASIRITIC creó un espacio para la discusión de temas vinculados al ámbito rural, especialmente aquellos que se veían como conflictivos como la destrucción o cierre de canales, los avances de SEMAPA, algunas políticas de gobierno como la concesión de lagunas para fines recreativos, la perforación de pozos profundos, el crecimiento urbano, etcétera. Estos dos últimos aspectos fueron (y siguen siendo) relevantes ya que condicionan el futuro del proyecto y de la existencia del sector agrícola en general. Es por esta razón que una de las primeras acciones de la ASIRITIC será en contra de las urbanizaciones y a favor del Proyecto Misticuni dentro del que ya se sentían incorporados y al cual utilizaban como justificativo para exigir medidas que aseguren la preservación de las tierras agrícolas en la zona” (Bustamente, 1997: 106).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

mecánica de clases, constituían sujetos. Las luchas de clases en los Valles de Cochabamba destruyeron en gran parte las haciendas y redistribuyeron los derechos de agua, cambiaron las relaciones de producción imperantes y los privilegios de los hacendados sobre el agua¹⁷. Sin embargo, es importante precisar que la formación de estos sujetos no fue un hecho únicamente material. Aunque las relaciones sociales de producción establecieron las condiciones, fue el desarrollo concreto de las luchas de clases lo que terminó de configurar sus fisonomías, expresándose en la organización sindical que se extendió en los Valles, y que aún hoy es posible identificar como parte integrante de las organizaciones de riego.

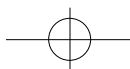
Lo mismo podemos decir respecto al período marcado por la guerra contra la perforación de pozos. Las perspectivas de las luchas de los regantes, “la resistencia a la descampesinización” (Bartra, 1979: 47), es decir por preservar la condición campesina, dependía de la correlación de fuerzas existente. La Guerra del Agua de abril de 2000 abriría un abanico de posibilidades que proyectaría la lucha campesina más allá del terreno de sus intereses inmediatos. Sin embargo, de momento nos interesa analizar en qué consistían estos, bosquejando la “fisonomía de clase” de los campesinos regantes del Valle Central de Cochabamba.

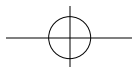
Hacia 1992, alrededor de 170 mil habitantes se hallaban asentados en el sector rural del Valle Central (Vargas, 2000: 192), el 34% de la población total en la región. Cuatro años después, 5.408 habitantes se asentaban en el área rural de Sipe Sipe, el 28% de la población en la sección¹⁸. Viloma, el cantón que es atravesado por una de las más importantes cuencas del Valle Central¹⁹, concentraba entonces el 65%

17 “Las clases sociales son, no sólo constituidas, sino en última instancia *constituyentes* del complejo de las relaciones sociales de producción y son, a la vez, *resultado y sujeto*, agentes del proceso histórico” (Bartra, 1979: 24). Debatiendo con el estructuralismo, Bartra sostiene que las clases no son meros *soportes*, sino sujetos de transformación. Son las revoluciones donde las clases *constituyen* relaciones de producción: “Ciertamente las clases sociales y su lucha son *resultado* de la reproducción de los modos de producción y en este sentido la teoría de estos modos de producción nos da la clave de su *constitución*, pero la lucha de clases está también en el *origen* de los modos de producción y es su ‘partera’, y en este sentido la teoría general y específica de la lucha de clases nos da la otra *clave* del proceso histórico por el cual estos modos de producción son *constituidos*” (Bartra, 1979: 35-36).

18 “Las comunidades de la zona de Viloma presentan un alto nivel de migración, teniéndose un 65% que lo hace en forma temporal y un 35% en forma definitiva, y siendo los polos de migración el trópico cochabambino, Santa Cruz y otros Valles de Cochabamba” (Salazar, 1999: 54). Sin embargo, Salazar no aclara si los porcentajes se refieren a la población global o “a los que migran”. Si se tratara de este segundo caso, tampoco se menciona cuál es la cantidad de la población migrante.

19 Según el máximo dirigente de los campesinos regantes, Omar Fernández, en el Valle de





LORGIO ORELLANA AILLÓN

de su población económicamente activa en la agricultura y ganadería, y el 35% en el comercio, transporte, artesanía y albañilería.

El 81% de las familias existentes tenían terrenos para actividades agropecuarias, y el 19% restante no tenía tierras: jornaleros o trabajadores en tierras de arriendo la mayoría. Mientras que el 65% de los propietarios poseía hasta una hectárea de tierras, las extensiones del restante 35% de las propiedades oscilaban entre una y cinco hectáreas (PDA-Viloma, cita en Salazar, 1999: 54)²⁰.

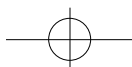
De las referencias precedentes es posible inferir que del 65% de la población económicamente activa de Viloma, en 1996 la mayoría era agricultora con tierras menores a una hectárea de superficie. Pequeños propietarios, productores directos de parcelas, que producían valores de uso destinados a la venta en el mercado para obtener medios de subsistencia y medios de producción orientados a la reposición de su fuerza de trabajo y la reproducción simple de la economía campesina, respectivamente.

Allí, el fin de la producción es la satisfacción de las necesidades humanas, el valor de uso. Se trata del pequeño productor parcelario, vinculado a la economía capitalista a través de la venta de productos agrícolas en el mercado, que requiere de una gran cantidad de agua debido a la explotación intensiva de la tierra que realiza. Evidencia de ello es el complejo y extenso entramado de sistemas de riego existentes en la región.

“En Sipe Sipe existen 6 sistemas de río, 21 sistemas de vertientes, 11 fuentes de tajamar y 88 pozos. Todas esas fuentes, al ser habilitadas o construidas por un grupo de usuarios o comunidades, se constituyen en sistemas de riego y sistemas de agua potable, con derechos de agua establecidos entre sus miembros, derechos que forman la base de la organización de los sistemas de recursos hídricos para ejecutar

Cochabamba existen alrededor de 100 organizaciones de campesinos regantes, que se distribuyen en 8 cuencas: la cuenca del Valle Alto Oeste; la cuenca del Valle Alto Este, que se subdivide en las cuencas de Punata y Tiraque; la cuenca del Valle Central, dividida en la cuenca del Valle Central Este y Valle Central Oeste; luego, la cuenca del río Mizque, la cuenca del río Tapacará y finalmente la cuenca del Valle Bajo (entrevista a Omar Fernández, secretario general de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba; Cochabamba, 20 de febrero de 2001). Mientras que los ríos de Tiquipaya y El Paso se encuentran en la cuenca del Valle Central Este, los ríos la Llave y Viloma se encuentran cerca de las manchas urbanas de Vinto y Sipe Sipe, en el Valle Central Oeste. Sus nacientes se hallan en lagunas ubicadas en la zona Noroeste de dicha región (Ver Mapa N° 1).

20 Las referencias que Bustamante (1997) proporciona sobre Tiquipaya son las siguientes: “De acuerdo a datos del PEIRAV un 60,3% de los propietarios en Tiquipaya poseen una superficie de entre 0,25 a 1 ha, un 14,7% tiene entre 1 y 2,5 ha, mientras que 9,2% posee 2,5 a 7,5 ha. De estos datos podemos concluir que una gran mayoría de los terrenos agrícolas en la zona están considerados dentro de la categoría de pequeña propiedad o solar campesino” (Bustamante, 1997: 13).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

actividades de manejo de agua (operación, distribución), de mantenimiento del sistema y de sostenibilidad del recurso” (Salazar, 1999: 62).

La cuenca Viloma tiene tres sistemas de río, de los cuales el río Viloma abastece a veinticuatro comunidades. Luego está la cuenca Huallaquea de donde se desprenden dos ríos, uno de los cuales satisface a dos comunidades. La cuenca Puncuruma está formada por el río El Chaco, que abastece a ocho comunidades y alrededor de mil habitantes. Finalmente, las cuencas de río Grande y Tapacarí, que abastecen a poco más de 3 mil habitantes (ver Mapa 1). En su conjunto, la distribución del agua se organiza según la época de lluvias y el estiaje. En períodos de lluvia, entre el 1° de enero y el 31 de marzo, existen aguas a demanda libre²¹. Entre abril y junio, aguas comunes; y las aguas de mita²² se distribuyen entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre. Sin embargo, la división de turnos es diferente entre una y otra comunidad.

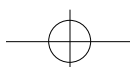
“Internamente, los derechos de agua en época de turnos son variables de comunidad a comunidad. Por ejemplo: en Viloma Grande se asigna, por cada dos hectáreas, una hora de Cuerpo y dos horas de Cerrillo y Chaupilarka. En Mallcorrancho, se tiene 15 minutos por arrobada (3.625 m²). En la comunidad Lola, se establece una hora y cuarto por cada dos hectáreas de terreno. La comunidad Pirhuas asigna veinticinco minutos de aguas de Cuerpo por cada hectárea” (Salazar, 1999: 65).

El juez de Aguas²³, escogido en una asamblea formada por delegados de las comunidades (dos por comunidad), es el responsable de la distribución del agua (comunes y mitas) a nivel de todo el sistema de riego, utilizando padrones de distribución, entregando “recibos”

21 “En aguas a demanda libre, los usuarios que quieren agua se encargan de habilitar la bocatoma, y de la conducción y vigilancia” (Salazar, 1999: 65).

22 “En cuanto a los derechos de agua de mita, existen ocho tipos de agua, correspondiendo a cada uno de ellos diferentes caudales de división de mitades. Esos derechos tienen los siguientes nombres: *Caudal López*, es todo el caudal del río (100%), tienen derecho usuarios de sólo 5 comunidades; *Caudal Cuerpo*, es la mitad del caudal del río (50%), acceden a este derecho sólo 8 comunidades; *Caudal Tercera*, es la mitad del cuerpo (25%), riegan 15 comunidades; *Caudal Sangría de la Jarka*, es en magnitud igual al de la *Tercera* (25%), riegan 5 comunidades; *Caudal*, es la unión de la *Sangría de la Juarka* y la *Tercera*, haciendo el 50% del caudal total del río, riegan 5 comunidades; *Caudal Sangría*, es la mitad de la *Tercera* (12,5%), riega una comunidad; *Caudal Cerrillo*, es la mitad de la *Sangría* (6%), riegan 8 comunidades; y el *Caudal Derecho o Suroqa*, es aproximadamente igual a *Cerrillo* (6%), riega una comunidad” (Salazar, 1999: 63).

23 Durante la colonia, en el período de las reformas toledanas del siglo XVI, que ubicaron a los indígenas en espacios geográficos reducidos como los “Pueblos de Indios” de Sipe Sipe, El Paso, Tiquipaya, el juez de Agua era la “autoridad máxima”, “responsable de la distribución en una parte del virreynato y tenía la atribución de responder conflictos entre los usuarios” (Gerbrandt y Hoogendam, 1998: 128).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

donde se indica el día y la hora del turno de cada comunidad, y resolviendo conflictos sobre la división de aguas entre las comunidades.

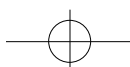
Según el juez general de aguas en la cuenca del río Viloma, Felix Aguirre, la Asociación de Riego se halla conformada por jueces generales y jueces comunales de agua. La función de los jueces generales es hacer respetar los derechos de agua de las veinticuatro comunidades salpicadas alrededor de la cuenca. Un representante titular y otro suplente de cada una de las comunidades son escogidos en una asamblea de su comunidad, representando a cada región para el desarrollo de la gestión del agua. Estos representantes escogen en una asamblea, a través del voto directo, al juez general, por el período de un año calendario.

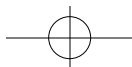
Así, la organización de regantes de la cuenca del río Viloma reproduce en el plano superestructural la embrollada historia de la estructura agraria sintetizada en los sistemas de riego del Valle Central. Los rasgos de una forma de control autocrático, heredada del siglo XVI, junto a formas de democracia asambleísta de tipo sindical. Mientras que en el siglo XVI los jueces de Aguas eran impuestos desde arriba como la “autoridad máxima” para la resolución de conflictos entre los usuarios de agua, los jueces de Agua de la Cuenca Viloma del siglo XXI son escogidos en asambleas de delegados; jueces generales que siguen teniendo la última palabra en la resolución de conflictos entre asamblea y asamblea. Sin embargo, es importante señalar nuevamente el contrapeso relativo que establecen “las bases” a su autoridad.

Las reuniones de los representantes, según el tesorero de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba, Guillermo Saavedra, tienen lugar cada 1° y 15 del mes. La repartición del agua se realiza a partir de la toma principal, “con todas las bases”²⁴, para que conozcan la profundidad del caudal del agua por distribuir.

Las tareas de vigilancia varían de acuerdo a las comunidades y a la época en que se realice el riego. Por ejemplo, en época de aguas a demanda libre, en algunas comunidades vigilan sólo los interesados; en otras comunidades se cuenta con roles fijos de vigilancia bajo el control del secretario general del Sindicato Agrario y el delegado de Aguas. “En cuanto a la mita, las tareas de conducción y vigilancia son organizadas por los Delegados de Agua de cada comunidad entre el total de miteros (usuarios con derecho a mita), practicando las mismas modalidades que en el caso de las aguas comunes” (Salazar, 1999: 65).

24 Entrevista a Guillermo Saavedra, tesorero de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba, Cochabamba (febrero de 2001).

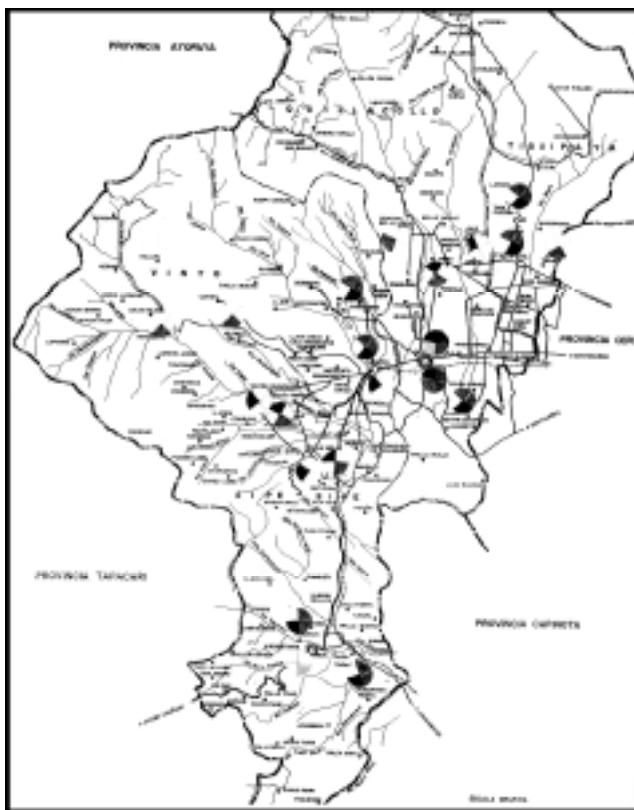




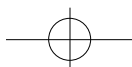
RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

“En la comunidad, la distribución de aguas comunes recae en Delegados de Agua y Jueces de Agua, quienes manejan las siguientes modalidades, dependiendo de tareas específicas para cada modalidad: en Mallcorancho la distribución se realiza en ocho zonas, bajo la responsabilidad de un delegado por zona, quien cobra un boliviano por usuario por su labor; en Vilomilla, se distribuye el agua desde la toma comunal entre todos los usuarios por igual, bajo reloj; la comunidad Vargas entrega una hora de agua por persona, bajo responsabilidad del Delegado de Agua; en la comunidad Pirhuas nombran a un Juez de Aguas por cada turno en forma rotativa, que distribuye el agua de arriba-abajo en un turno y de abajo-arriba en el siguiente turno” (Salazar, 1999: 64).

Mapa 1
Provincia de Quillacollo



Fuente: Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba. Gerencia de Planificación y Coordinación.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

Mientras que el juez general se halla encargado de repartir el agua a todas las comunidades, los jueces comunales reparten el agua entre cada una de las familias que componen la comunidad de acuerdo a criterios de lo más variados, que dependen del sistema de riego existente en dicha región. “Son los Jueces Comunales quienes tienen que repartir a su costumbre [...] si son media horita, una horita, muy variable es en cada comunidad”²⁵.

El juez comunal de Pirwas, Félix Guzmán, indicaba que en su comunidad se constituyó una cooperativa donde el derecho al agua parte de la acción que cada uno de los usuarios pagó para acceder a dicho beneficio. De acuerdo al dinero pagado, uno puede tener acceso a 6 minutos, 45 minutos, o una hora.

En períodos de sequía la comunidad Pirwas se abastece con dos pozos, que costaron 27 mil dólares a la comunidad, de los cuales ellos son copropietarios. Las acciones se distribuyen entre los socios. Cada acción equivale a cinco horas, aunque las acciones también varían entre pozo y pozo²⁶.

Mientras que al juez general el incumplimiento de sus obligaciones puede costarle la suspensión de su cargo, “al Juez Comunal de Pirwas le costaría el equivalente a 4 o 5 jornales”. “En relación a las sanciones por infractores de sus turnos, roban agua o rompen una toma; en el caso de Pirwas se avisa al Juez General quien realiza primero un castigo. Ante una reincidencia el infractor debe pagar en horas de agua a la comunidad”²⁷. El juez general establece la multa a los infractores, o finalmente el corte del derecho a recibir agua.

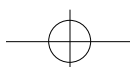
Nuevamente se constata que las organizaciones de riego han recuperado varios rasgos de la disciplina sindical. El juez general de Aguas se halla sujeto a la revocabilidad de mandato en caso de incumplir con sus obligaciones, pero dialécticamente a la vez se halla autorizado para imponer multas a los infractores, o finalmente cortarles el derecho de agua.

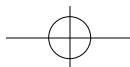
El actual sistema de riego en la cuenca del río Viloma es síntesis del período de las haciendas y de la reforma agraria de 1953. Al parecer la cuenca perteneció a una hacienda que luego sería dividida entre los campesinos, mientras los derechos de agua se redistribuyeron.

25 Entrevista a Félix Aguirre, juez general de Aguas de la Cuenca del río Viloma (20 de febrero de 2001).

26 Entrevista a Guillermo Savedra (febrero de 2001).

27 Entrevista a Félix Guzmán, juez comunal de Aguas de la Comunidad Pirhuas, Cochabamba (20 de febrero de 2001).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

ron entre los colonizadores y los piqueros, que ya durante el período de la hacienda contaban con pequeñas propiedades y acceso limitado al agua.

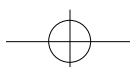
Entre 1994 y 1995 la ONG CIDRE desarrolló un proyecto de riego y gestionó su financiamiento. Fueron los brazos de los campesinos regantes los que construyeron el sistema. El actual sistema de riego de la Cuenca del río Viloma heredó la forma de reparto de la época de la hacienda y de la revolución del '52, y en parte es producto de un proyecto de riego dirigido por una ONG.

La estructura de los sistemas de pozos en Sipe Sipe tiene una heterogénea configuración que varía desde la profundidad (86-120m), el caudal de cada bombeo, hasta el número de usuarios existentes (desde las treinta y ocho a las sesenta familias) en cada sistema. Los pozos son construidos con el aporte económico y laboral de los usuarios, lo cual les da derecho a determinadas acciones al interior del sistema; acciones que tienen un precio determinado²⁸ y pueden venderse consultando al resto de los accionistas, organizados en asambleas que se reúnen para rendir cuentas sobre los aportes, planificar y organizar la gestión del sistema.

Las asambleas se llevan a cabo entre todos los socios de los pozos. Para ser socio es necesario tener el consentimiento de los demás accionistas o haber participado en la construcción, aportando una determinada cantidad de dinero que se establece de acuerdo al costo de la perforación, revestimiento, etc., el número de socios existente, y el trabajo concreto desplegado en el proceso de construcción, teniendo posteriormente la obligación de contribuir en el mantenimiento de los pozos, limpieza de las acequias, etcétera.

Generalmente en las reuniones se planifica la movilización de la fuerza de trabajo para el mantenimiento del sistema de riego; el tesorero rinde cuentas sobre los gastos realizados; se planifican nuevas perforaciones; se acuerdan aportes o préstamos para realizar mejoras del sistema, ventas del servicio de agua a otros particulares y la incorporación de nuevos socios. La organización tiene un carácter formalizado. Posee un "directorio", normalmente compuesto por las carteras de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario de Actas y

28 "Indagando sobre la relación entre horas de derecho y costo de cada acción, estos se encuentran en niveles de: 1 acción de 1 hora con un costo de 675 US\$, 1 acción de 3 horas con 3000 US\$, 1 acción de 6 horas con 1.620 US\$. Estos cubren los gastos de perforación, instalación eléctrica, compra de bomba sumergible y otros implementos menores, que, en total, pueden llegar a un valor de 40.000 US\$" (Salazar, 1999: 67).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

vocales. Sus reuniones se hallan consignadas en actas, y la inasistencia a cualquier actividad que se acuerda de manera colectiva es multada, incluidas las fiestas que se programan colectivamente en algunas cooperativas de pozos²⁹.

La reprobación de la inasistencia a las actividades festivas tiene una razón de ser en el contexto de la estructura social, "pues, sea cual fuere el origen de esos sentimientos, una vez que forman parte del tipo colectivo, y sobre todo si son elementos esenciales del mismo, todo lo que contribuye a quebrantarlos, quebranta a la vez la cohesión social y compromete a la sociedad. Su nacimiento no reportaba ninguna utilidad; pero, una vez que ya se sostienen, se hace necesario que persistan a pesar de su irracionalidad" (Durkheim, 1993: 136).

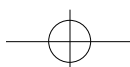
Las fiestas son un factor de cohesión que reproduce la división del trabajo social que se desarrolla alrededor de los sistemas de riego; es en las fiestas donde los alcaldes y las autoridades locales ofrecen chicha y comida y recrean las redes de compadrerío y sumisión que los mantiene en el poder; es en las fiestas donde se manifiestan las grescas que surgen de resentimientos escondidos por distribuciones injustas de agua; y, finalmente, es en dichos actos festivos donde se reproducen los lazos de solidaridad social que refuerzan el trabajo colectivo en los sistemas de riego; momentos de distensión, válvulas de escape de las faenas cotidianas, las fiestas reproducen la división del trabajo social en los sistemas de riego: pequeños destellos de ocio que hacen menos penosa al trabajador campesino la tarea de volver a trabajar en su parcela al día siguiente.

En estos sistemas de pozos, junto a los ríos, vertientes, lagunas³⁰ y tajamares, que de igual modo responden a formas de gestión y distribución específicas³¹, es el trabajo concreto desarrollado colectivamente, tanto en la construcción como en el mantenimiento de los sistemas, el que define la característica fundamental de las relaciones de reproducción social establecidas entre los campesinos regantes del Valle Central de Cochabamba. Se trata de relaciones donde el criterio

29 Así sucede en Mallco Ch'api. Sus actas lo consignan.

30 Sobre el proceso de construcción, organización y gestión de un sistema de riego de laguna en El Paso, puede verse Gerbrandy y Hoogendam (1998: 169-200).

31 Sólo hacer un inventario de los sistemas de riego del Valle Central de Cochabamba y sus características, sería objeto de ensayos completos. Para mayor ampliación sobre el caso de Colcapirhua, puede verse Salazar (1997); y con relación a Tiquipaya, Bustamante (1997). A modo de referencia, mencionamos que en Tiquipaya y Colcapirhua existen sistemas de mitas, lagunas y represas como los de Machu Mit'a con 829 usuarios, Lagum Mayu con 622, Sayt'u Kocha tiene 332 usuarios, Chankas-Montecillo cuenta con 57 y Chankas Sirpita tiene 52 usuarios (Bustamante, 1997: 15).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

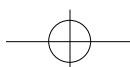
que predomina para acceder al agua y la permanencia como usuario es el trabajo desarrollado al construir la presa, mantener limpias las acequias, limpiar los sedimentos, en síntesis, el trabajo concreto desplegado en la construcción y mantenimiento del sistema.

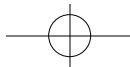
Estas relaciones condicionan la emergencia de una forma de derecho concreto. El castigo surge del incumplimiento a las obligaciones materiales y sociales emergentes del trabajo colectivo y la organización alrededor de los sistemas de riego. No asistir a las labores de limpieza de acequias, mantenimiento de pozos, destapamiento de cámaras, limpieza de sedimentos, e incluso fiestas, supone multas y suspensiones del turno de agua en caso de fallos reiterativos, hasta la pérdida definitiva de la acción o el turno de riego, sujetos a ser puestos en oferta a otras personas que quieran comprarlos³².

Se evidencia por tanto el desarrollo de derechos y obligaciones directamente ligados al trabajo concreto desplegado, al dinero invertido en el proceso de construcción, al mantenimiento del servicio del agua en su conjunto, y la realización de actividades sociales y culturales que reproducen las relaciones de trabajo colectivo en los sistemas de riego. Son derechos individuales que el usuario adquiere al interior del sistema, “derechos individuales o familiares en un contexto de decisiones colectivas” (Gerbrandy y Hoogendam, 1998: 106), intereses particulares permeados por actividades culturales y organizacionales de carácter colectivo.

Sin embargo, estas “formas de conciencia social” no modifican el hecho material de que son pequeños propietarios asociados para resolver el problema del abastecimiento del agua, asociación en la cual figuran como pequeños “accionistas”, cuyos derechos dependen del trabajo y el dinero que el campesino y su familia aportaron en la construcción y el mantenimiento del sistema. La organización colectiva del trabajo responde a intereses privados ligados a la pequeña parcela de tierra, aunque el desarrollo colectivo del trabajo ligado a los sistemas supone la emergencia de intereses colectivos cuando existen disputas entre diferentes comunidades y existen superestructuras culturales que buscan reforzar la cohesión social. La pequeña producción parcelaria es el basamento material de dichos procesos.

32 En ciertos ayllus del altiplano boliviano se evidencia una situación diferente, puesto que se concibe que a nadie se le puede quitar el derecho al agua de manera definitiva (Ver Gerbrandy, en Boelens y Davila, 1998: 339).





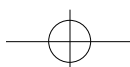
LORGIO ORELLANA AILLÓN

En este sentido, la lucha por la defensa de los “usos y costumbres”, si bien es un enfrentamiento por la defensa de las “formas sociales y culturales de articulación global que le dan sentido a la vida” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 181) del campesino, fundamentalmente es una lucha por la defensa de la pequeña producción parcelaria, por el derecho a que un determinado caudal de agua del río, las vertientes o los tajamares siga regando los surcos.

Las actividades festivas, sociales y culturales que sirven para fortalecer la cohesión social y el trabajo organizado de manera colectiva alrededor de los sistemas de riego, son otras tantas superestructuras que mantienen la condición campesina del pequeño productor y propietario parcelario, explotado a través del mercado por el capital. Sin proponérselo, aquellos quienes apologetizan los usos y costumbres sobre el manejo y la gestión campesina del agua hacen ideología de lo “comunitario”, ensombreciendo la condición oprimida del campesino regante, que nada tiene de igualitaria.

Comprender este asunto es fundamental para no caer en la ilusión de que la “rehabilitación” de los “usos y costumbres” en la Ley 2.029, después de la Guerra del Agua, fue desenterrar “la añoranza del Viejo Marx de proponer la superación del régimen del capital a través de la reconstrucción, ‘en condiciones superiores’, de las viejas estructuras comunales agrarias” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 177). Que yo sepa, nunca Marx “añoró” una “superación del régimen del capital” por una sociedad de pequeños propietarios; menos aún por la vía legal.

La diversidad de sistemas de riego y las formas de organización colectiva existentes en los Valles, que bajo las más variadas formas reproducen la condición campesina de los trabajadores del agro, no son potencialmente “estructuras comunales agrarias” anticapitalistas, afirmación que además de utópica, cae en un grosero reduccionismo. Estas formas de cooperación simple, desplegadas para la construcción de pesadas obras hidráulicas, se realizan con la función de potenciar la capacidad de trabajo –característica de formas sociales asentadas sobre un bajo desarrollo de las fuerzas productivas– sin por ello modificar la estructura social agraria; muy al contrario, para reforzarla. Las organizaciones de regantes son superestructuras que movilizan fuerzas productivas al servicio de la pequeña producción parcelaria. Los sistemas de riego fueron concebidos para resolver la demanda de riego de la pequeña parcela donde se trabaja la tierra de manera intensiva y diversificada. Los campesinos han creado complejos siste-





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

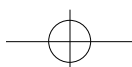
mas de riego para el mantenimiento de la pequeña producción parcelaria, y por tanto de su condición campesina de pequeños propietarios de la tierra. Esa es la dimensión conservadora de los usos y costumbres en el Valle Central.

La forma que asume el proceso de producción parcelario –encarado por el campesino y su familia– y la reproducción material del servicio del agua, es decir, la organización colectiva del trabajo, el tipo de desarrollo tecnológico que surge a partir de dichas relaciones de reproducción social (canales, acequias, pozos, etc.), condicionan determinadas superestructuras organizativas, organizaciones de riego que al mismo tiempo reproducen las estructuras materiales de la pequeña producción parcelaria, la pequeña propiedad de la tierra, y las mismas redes de abastecimiento y distribución de agua construidas. Es una interdependencia dialéctica.

“Una de las áreas de cooperación y organización comunal, es el manejo del agua, porque la construcción de obras hidráulicas, su operación y mantenimiento, requieren de esfuerzos mayores a los de una sola familia. Antes de la Reforma Agraria, parte de la responsabilidad de los sistemas de riego estaba en manos de los hacendados. Después de la Reforma, todos los sistemas pasaron a manos de las comunidades campesinas y su gestión depende de los acuerdos de las comunidades y comunarios que las componen” (Gerbrandy y Hoogendam, 1998: 31).

Esos “acuerdos”, que se materializaron en organizaciones, reglamentos, derechos, obligaciones, a los que deben añadirse actos festivos, rituales, etc., deben entenderse como formas de reproducción social de la pequeña producción parcelaria alrededor de la cual el campesino desarrolla su vida, pero también son “formas de conciencia social”, superestructuras donde se van perfilando los contornos de la fisonomía política de los campesinos regantes: sus ataduras a fidelidades locales que se construyen con las alcaldías en las fiestas y borracheras, o la posible reconfiguración de su identidad, a partir de la lucha de clases, por la preservación de sus “usos y costumbres” frente al capital.

Se trata de un espacio contradictorio. El escenario creado alrededor de la defensa de los “usos y costumbres” es un campo de lucha que puede ser llenado con los más diversos contenidos. Las autoridades locales, partidos políticos, a través de la realización de mejoras en los sistemas de riego, fiestas, regalos, reclutan el apoyo campesino, encadenándolo en una red particularista de “compadrerío” y prebenda alrededor de las alcaldías. Pero a su vez la lucha contra la perfora-





LORGIO ORELLANA AILLÓN

ción de pozos y el proceso de privatización del agua, sentida colectivamente por los campesinos, abre las posibilidades para llenar con un contenido diferente las reivindicaciones campesinas. Las formas de conciencia social emergentes a partir de los sistemas de riego son otros tantos escenarios de la lucha de clases.

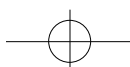
Aquí son los campesinos los que hacen su historia, y en ese proceso ellos mismos se hacen, pero su actuación está condicionada por la pequeña producción parcelaria orientada hacia el mercado, basada en la pequeña propiedad de la tierra, y ahora por el conjunto de relaciones organizativas emergentes a partir de los sistemas de riego, que forman parte de su historia y que a su modo han recuperado la tradición sindical campesina posterior a 1952 (Gordillo, 2000).

Subjetividades objetivadas en el proceso histórico, que son también espacios de lucha y subordinación. En ese edificio social se encuentran sus potencialidades y obstáculos, allí se hallan demarcados los límites de la historia que los regantes pueden construir por sí mismos.

Reuniones y asambleas constantes para tratar los problemas emergentes del riego³³, y el trabajo colectivo para limpiar acequias, abrir canales, etc., contribuyen a unir lo que la excesiva parcelación de la tierra ha logrado separar, ya sea para apoyar en las elecciones a algún partido político neoliberal o para resistir la perforación de pozos facilitada por los mismos partidos a los que el campesino ayer apoyó. Así, la existencia de organizaciones de riego puede ayudar a contrarrestar la tendencia al localismo y la atomización, característica del movimiento campesino, abriendo la posibilidad de que este se constituya en fuerza de masa por un problema bastante específico, el agua; o puede profundizar las rencillas entre regiones por el tema del agua y ahondar nuevamente el localismo, tendencia comúnmente fortalecida por los gobiernos municipales cuando la amenaza de perder el agua no ha sido asumida colectivamente como clase³⁴. Las posibili-

33 En Viloma, por ejemplo, la obligación de los jueces generales y comunales de agua "es reunirse cada 15 días obligatorio y cuando hay necesidad cualquier día... [por] robo, alteración de marcas, ruptura de tomas" (entrevista a Félix Aguirre, febrero de 2001).

34 Las peleas violentas entre campesinos acompañaron con frecuencia la construcción de sistemas de riego en el Valle Central de Cochabamba. Por ejemplo, en 1996, las comunidades de Viloma empezaron a gestionar a través de la prefectura y la alcaldía la construcción de una represa en la cabecera de la cuenca, creando una asociación de regantes. Las comunidades de Keraya, Cala Cala y Challwiri, en cuyos terrenos se pensaba construir la presa, apedreaban a los técnicos cada vez que estos subían a realizar estudios. "Los comunarios de la zona del Valle intentaron colocar como mediador al Alcalde de Sipe Sipe, que estaba a favor de la construcción de la represa. Frente a este hecho, las comunidades de



dades y limitaciones políticas de los regantes se revelarán entre noviembre de 1999 y abril de 2000.

Referencias sobre el proceso de privatización de los recursos hídricos en la región

Comenzando en septiembre de 1999³⁵, el gobierno boliviano firmó un contrato de concesión con el consorcio Aguas del Tunari³⁶ por el lapso de cuarenta años en los cuales la empresa ocuparía el papel del SEMAPA, ofertando los servicios de agua potable y alcantarillado; extendería la red de agua potable y alcantarillado en la ciudad; y terminaría la construcción del millonario proyecto para riego y abastecimiento de agua potable MISICUNI. El cuarto y segundo anexo del contrato señalaban al Valle Central y Alto, zonas concesibles³⁷, afectando las fuentes de agua superficiales y profundas de los campesinos regantes³⁸.

En octubre del mismo año el Parlamento Nacional aprobó la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que establecía: “Ninguna persona natural o jurídica de carácter público, asociación civil, con o sin fines de lucro, sociedad anónima, cooperativa, municipal o de cualquier otra naturaleza, puede prestar Servicios de Agua Potable o Servicios de Alcantarillado Sanitario en Zonas Concesibles, sin la debida Concesión emitida por la Superintendencia de Saneamiento Básico” (Honorable Congreso Nacional, 1999: 5). La Ley 2.029 marcaba las pautas para el ingreso del capital transnacional en la administración de los recursos hídricos para el servicio de agua potable en la región, que posteriormente debía completarse con

la zona alta de la cuenca Viloma se declararon territorio del municipio de Vinto, que apoyó incondicionalmente el rechazo de la obra... el proyecto fue postergado” (Salazar, 1999: 83). Es la pelea entre los pequeños propietarios.

35 *Última Hora*, 4 de septiembre de 1999.

36 “Formada por Bechtel, Abengoa y otras empresas, incluidas algunas de capital nacional” (Laserna, 2001: 9).

37 Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (2000: 186).

38 Entrevista a Omar Fernández (20 de febrero de 2001). Un extracto del convenio indica: “Anexo 5: El concesionario tendrá derecho de instalar medidores para cualquier usuario en cualquier momento y de requerir un pago por dicha instalación de parte de los mismos... Seis meses después de la fecha en que se logre suministro de agua que cumpla con las normas de niveles específicas... no se permitirá el uso de fuentes alternativas. Numeral 1.3: Cuando un usuario posee una fuente alternativa de agua (por ejemplo un pozo privado) el concesionario tendrá derecho de instalar un medidor en la fuente alternativa –que costará \$80– a expensas del usuario” (cita en Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 142).



LORGIO ORELLANA AILLÓN

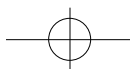
la Ley del Recurso Agua, por la cual debían regirse las demás leyes. Curiosa manera de proceder.

El 8 de diciembre de 1999 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo blando de 40 millones de dólares para programas de saneamiento básico en Bolivia, condicionando el crédito a una “ley básica”. Respondiendo a reclamos de los campesinos en noviembre de 1999, que señalaban con el dedo el proyecto de Ley del Recurso Agua, el ministro de Desarrollo Sostenible José Luis Carvajal dijo: “El Poder Ejecutivo no puede retirar del Congreso Nacional el proyecto de Ley del Recurso Agua, rechazado por los campesinos, debido a que hay compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar proyectos hídricos que el país no puede perder [...] No podemos retirar el anteproyecto porque nos genera problemas: hay financiamientos del BID vinculados para ciertos proyectos, esto no quiere decir que esté condicionado, pero si voy a pedir apoyo económico para un proyecto de riego; me piden primero la ley básica”³⁹.

Contradiciéndose, el ministro decía a un mismo tiempo: no estamos condicionados, pero estamos condicionados. La Ley del Recurso Agua, que debía ser el marco de leyes específicas como la Ley de Saneamiento Básico, todavía no estaba aprobada en septiembre de 2000. El apresuramiento del gobierno en aprobar la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado obedecía al ingreso del consorcio Aguas del Tunari.

Como parte de las políticas neoliberales impuestas por el imperialismo en la periferia capitalista con el consentimiento de sus gobiernos, la privatización de los recursos hídricos, impulsada por las entidades financieras internacionales, fue justificada por la “ineficiencia”, corrupción y poca cobertura que otorga la administración estatal del agua en la región (Savedoff y Spiller, 1999; traducción nuestra). Se criticó que, a título de mantener bajas tarifas en el pago por los servicios de agua, se otorga un servicio de baja calidad. En los hechos, el Estado, como haría cualquier otra empresa transnacional, “expropia” a los campesinos el agua; pero a diferencia de aquellas, la administra mal. “Latinoamérica pierde nueve millones de metros cúbicos de agua cada año” como consecuencia de ello, se dijo (Savedoff y Spiller, 1999; traducción nuestra).

³⁹ *Presencia*, 14 de septiembre de 2000.



RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

En los últimos años el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial renovaron su interés en promover la creación de un mercado de aguas en los “países en vías de desarrollo”; partiendo de la antigua tesis de que el mercado es el mejor asignador de recursos: “la típica prescripción económica propone, para encarar los desequilibrios entre la demanda y el suministro de agua, la introducción de un mercado de aguas..., el cual tiene la capacidad de racionalizar la escasez de agua tanto cuantitativa como cualitativamente” (Rausser, en Dinar, 2000: 49-50; traducción nuestra).

Se argumentó que en aquellos “países de bajos ingresos” los establecimientos domésticos estarían dispuestos a pagar por la conexión de un suministro privado de agua confiable y eficiente (Renzetti, en Dinar, 2000: 127; traducción nuestra). “No debemos subestimar la sensibilidad de los consumidores por los cambios en el precio del agua y su predisposición a pagar por la mejora del acceso a suministros confiables de agua. Muchas familias en los países de bajos ingresos parecen dispuestas a sacrificar una parte no insignificante de su ingreso para acceder a agua segura” (Renzetti, en Dinar, 2000: 136-137; traducción nuestra). Estudios financiados por el Banco Mundial indican que muchos campesinos estarían dispuestos a pagar más por su agua si el suministro se vuelve más confiable y en general el servicio mejora (Dinar, 2000: 9; traducción nuestra).

Las evidencias empíricas muestran que a partir de las reformas en los precios del agua en países del Tercer Mundo, monitoreadas por las agencias financieras internacionales, la tendencia de los precios del agua ha sido ascendente (Dinar, 2000: 2-4; traducción nuestra). El servicio del agua, considerado en el pasado un recurso poco rentable, cuya producción y distribución se hallaba en manos del Estado, es incorporado en los procesos de concentración y centralización del capital con el objeto de incrementar la tasa de ganancia; en el caso concreto cochabambino, garantizando una “plusvalía excedentaria de monopolio”⁴⁰, al facilitar un “mercado cautivo” por el lapso de cuarenta años a la transnacional Aguas del Tunari, expresión genuina de la alianza entre el imperialismo y las burguesías locales como socias menores⁴¹.

40 Para conocer los criterios en la fijación de tarifas para el servicio de agua potable y alcantarillado, pueden verse los diferentes reglamentos de “Precios y Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Concesibles”, elaborados por la Superintendencia de Agua Potable y Alcantarillado en 1999.

41 Samuel Doria Medina, millonario empresario boliviano y militante del Movimiento de Izquierda



LORGIO ORELLANA AILLÓN

La Ley 2.029 y el contrato de concesión con el consorcio Aguas del Tunari constituyen sólo un momento de la larga e intensa historia colonizada de este país, invadido en los últimos diez años por consorcios extranjeros que obtienen beneficios de la administración y venta del petróleo, el gas, el oro, el zinc, las telecomunicaciones, la leche, la luz y el agua, fundamentalmente; proceso facilitado por el Estado, convertido a través de un largo y paulatino proceso de cambios y reclutamiento de cuadros burocráticos, durante las cuatro últimas administraciones gubernamentales, en un aparato sin autonomía relativa alguna frente al capital transnacional, un instrumento que facilita el proceso de expansión capitalista en áreas de la economía que hasta entonces se hallaban bajo su tutela⁴². Aguas del Tunari vino efectivamente “a vendernos nuestra propia agua”, al igual que otras empresas transnacionales nos venden nuestro gas, gasolina, energía eléctrica, leche, etcétera.

Los orígenes de la Guerra del Agua

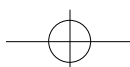
Los campesinos regantes del Valle Central de Cochabamba, que desde hace siglos venían creando y recreando sus sistemas de abastecimiento de agua, que desde hace décadas habían realizado perforaciones de pozos y habían expandido sus estructuras de riego, construyendo tajamares y creando acequias para recuperar el agua de las lagunas, ya no podrían seguir haciéndolo sin solicitar licencias a la Superintendencia, y sus fuentes de agua serían administradas por la transnacional.

La FEDECOR inició un proceso de reuniones, convocando a talleres ampliados para explicar los alcances del contrato con la transnacional y la Ley 2.029 en el área rural. Preparó el terreno para iniciar una movilización de impacto regional. Al principio débiles, las medidas se iniciaron con bloqueos el 28 de octubre en la carretera a Oruro, al saberse de la promulgación de la Ley 2.029⁴³. La unidad de las comunidades campesinas, juntas vecinales, cooperativas de pozos,

Revolucionaria (MIR), uno de los partidos de la coalición gobernante; era socio de la nueva empresa concesionaria.

42 Las Superintendencias fueron diseñadas a partir de las reformas neoliberales de Segunda Generación, durante el gobierno del MNR (1993-1997), con el objeto de facilitar la transferencia de los recursos del Estado al capital privado; y, teóricamente, corregir ciertas “fallas de mercado” en aquellos sectores monopólicos, haciendo controles de calidad y estableciendo criterios “aceptables” para la fijación de precios.

43 *Los Tiempos*, 6 de noviembre de 1999: A3.



RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

comités cívicos provinciales, impondría el 4 de noviembre una medida de mayor contundencia: “más de una veintena de barricadas de troncos, ramas, llantas, piedras y vehículos fueron colocadas desde el kilómetro seis y medio de la Avenida Blanco Galindo hasta Parotani (kilómetro 37 de la carretera a Oruro), donde los vecinos y comunarios de esos lugares se apostaron para no dejar pasar en algunos casos ni siquiera a las personas de a pie. Similar situación se dio en el camino hacia Sacaba y la carretera antigua a Santa Cruz, por lo que quedaron en el camino decenas de vehículos de transporte de carga y pasajeros varados durante las casi 10 horas que duró el bloqueo”⁴⁴.

En los bloqueos, vecinos y dirigentes de las manchas urbanas justificaban así sus medidas: “No vamos a aceptar que pongan medidores en nuestros pozos que los hemos perforado con el sacrificio de todos los que habitamos en el barrio Collpampa Kani”. “Hemos perforado nuestros pozos dejando de comer, inclusive, y ahora el Estado resulta que nos quiere quitar, imposible”. “Al colocar medidores a los pozos y cobrar el 60% por alcantarillado, nos van a imponer una tarifa según las categorías que Aguas del Tunari tiene. Si para defender nuestros intereses es necesario asumir otras medidas, lo vamos a hacer”⁴⁵.

La madrugada del 5, los intentos policiales por desbloquear la carretera fracasaron. Cientos de comunarios cercaron a los policías “al punto que tuvieron que replegarse. La gente destrozó parabrisas e hirió a dos uniformados. Siete personas fueron detenidas en los enfrentamientos”⁴⁶.

La organización de la movilización, que en principio tuvo un sentido descendente, es decir, la información y organización bajaron desde los dirigentes hacia las bases, pronto empezó a adquirir un sentido ascendente y comenzó a desarrollarse bajo la iniciativa directa de las masas: “los dirigentes de las diferentes comunidades, juntas vecinales, cooperativas de agua y otras organizaciones fueron rebasados ayer por sus bases. Ellos habían instruido levantar los bloqueos de las carreteras principales de Cochabamba el jueves a las 18:00, pero la instrucción no fue acatada; es más, las vías del Valle Bajo, Alto y Central amanecieron otra vez con barricadas... Los dirigentes quedaron sorprendidos con lo ocurrido en Vinto, pues se había acordado

44 *Los Tiempos*, 5 de noviembre de 1999: B2. Los campesinos alzan pancartas que decían “resistencia comunal a la privatización”.

45 *Los Tiempos*, 5 de noviembre de 1999.

46 *Los Tiempos*, 6 de noviembre de 1999.



LORGIO ORELLANA AILLÓN

realizar una reunión a las 10 de la mañana para evaluar los resultados del bloqueo del día anterior y recién asumir medidas”⁴⁷.

La movilización de los vecinos en las manchas urbanas y los campesinos regantes obligaron al ministro de Vivienda, Rubén Poma, y al superintendente de Aguas, Luis Uzín, a emprender a pie la carretera principal, salpicada de piedras y vidrios, hasta Vinto, para negociar. En una multitudinaria concentración el ministro intentó convencer a los bloqueadores de que la Ley 2.029 “no significaba la privatización de los pozos”. “Las bases rechazaron categóricamente la propuesta del Ministro de conformar una comisión de dirigentes para establecer una negociación más directa y llegar a acuerdos. Toda charla debía comenzar ahí, frente a todos”⁴⁸. Los movilizados habían salido a las calles “para lograr la abrogación de la Ley de Servicios Básicos y Alcantarillado y la anulación del contrato de concesión de Semapa y Misicuni Aguas del Tunari”⁴⁹.

La noche del 5 el ministro suscribió “un convenio garantizando que los pozos de los Valles Bajo y Central no serán afectados por la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, tampoco por el contrato de concesión con Aguas del Tunari”⁵⁰. El conflicto fue temporalmente postergado, pues la Ley 2.029 seguía estableciendo la figura de las concesiones, lo cual potencialmente iba contra los “usos y costumbres” de los campesinos regantes.

La “actualidad” de la protesta campesina contra la privatización de los recursos hídricos –protesta que en germen tendía hacia la generalización–, es decir, la superación de la contradicción entre posibilidad y realidad a través de una rebelión social contra la política privatizadora de los recursos hídricos que incluyera en su interior la movilización regante, pero en una etapa superior, dependía, como diría Hegel, de “la totalidad de las condiciones”, o mejor, “la Posibilidad Real de un caso es la existente multiplicidad de circunstancias relacionadas con él” (cita en Marcuse, 1971: 142).

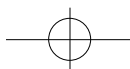
Cuál fue esa “multiplicidad de circunstancias” en medio de las cuales se desarrolló el problema sectorial de los campesinos regantes. Cómo es que en los hechos se formó la rebelión de abril de 2000. Cuáles fueron estas condiciones que, sin referirse formalmente al pro-

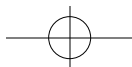
47 *Los Tiempos*, 6 de noviembre de 1999.

48 *Los Tiempos*, 6 de noviembre de 1999.

49 *Los Tiempos*, 5 de noviembre de 1999.

50 *Los Tiempos*, 5 de noviembre de 1999.





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

blema del agua, constituyeron el prelude de dicha tormenta. Mucho se ha dicho sobre las causas del conflicto de abril sin que por ello se desarrollen todas las consecuencias de dichos postulados. A continuación, nosotros hacemos un intento diferente.

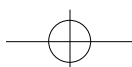
Las premisas sociales de la rebelión de abril

Se dijo que abril fue producto de la crisis de representación de los partidos políticos y la crisis económica (Milenio, 2001), explicación a la que otros añadieron la incapacidad de los cuadros burocráticos del gobierno para actuar conforme a la situación institucional liberal del país (Laserna, 2001: 21). Los menos moderados dijeron que fue producto de la “condensación de varios procesos: un proceso de descomposición interna y permanente en el seno del gobierno... la creciente conducción externa y colonial del país... un proceso de acumulación política de fuerzas sociales y populares contra la privatización del agua... una ofensiva-quebre de la lucha indígena en el altiplano⁵¹... a lo cual se suma luego la crisis de la policía al interior de los aparatos represivos del Estado” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 178).

Mientras que los primeros análisis no identificaron la profundización de las contradicciones al interior del gobierno, su “falta de autoridad”, “crisis de gobernabilidad”, con las fisuras que la movilización de abril fue abriendo en el seno de la clase dominante, ningún trabajo mostró que la aceleración de la crisis al interior de las fuerzas represivas, “la descomposición interna y permanente en el seno del gobierno” y “la crisis del sistema de partidos” formaban parte de un mismo proceso: la bancarrota política e ideológica de la clase dominante en Bolivia, la alianza entre el imperialismo y las burguesías locales, que promovieron la política neoliberal en el país.

Los análisis disponibles han mantenido sus explicaciones en el nivel de la crisis gubernamental sin profundizar en el problema del Estado, objeto de análisis fundamental cuando se trata de entender un proceso de características insurreccionales. Se comprende entonces el por qué de la ausencia de una explicación sobre la aceleración de la crisis policial en abril –que no “se suma luego” si no que vino desde más atrás–, rupturas en la superestructura estatal que abrieron la

51 Al Norte de la ciudad de La Paz, los indígenas aymaras bloquearon los caminos en abril, contra la Ley de Reforma Agraria. La intervención militar ocasionó muertos y heridos.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

posibilidad a que la “multitud” no sólo se apropiara del monopolio legítimo de la fuerza (García, 2001), sino que un sector de las mismas fuerzas represivas terminó sumándose a la subversión, a un proceso de características insurreccionales cuya organización, a su modo, empezó a bosquejar una nueva “forma estatal”. Pero esto corresponde a la teoría de los órganos de poder y la dualidad de poderes más que a la “forma multitud de las necesidades vitales” o a la “crisis de gobernabilidad”. Veamos entonces cuáles fueron las condiciones donde se desarrolló la protesta campesina contra la Ley 2.029 de fines de 1999.

Entre fines de noviembre y diciembre de 1999, una serie de explosiones de bomba en la ciudad de La Paz activó un conflicto en el seno de las fuerzas represivas del Estado, desatando una serie de acusaciones y contraacusaciones entre la policía y el ejército que señalaban a grupos “paramilitares” o “parapoliciales” –según de donde viniera la denuncia– como autores de los hechos. Su objetivo sería desprestigiar a la institución oponente con el fin de poner en cuestionamiento su propia existencia⁵².

Los hechos, que nunca fueron esclarecidos, más allá de quién haya realizado las detonaciones, revelaban un profundo malestar en el seno de las fuerzas represivas, especialmente en la policía, que desde meses atrás venía padeciendo una crisis presupuestaria. Noticias de que las oficinas policiales en Cochabamba se quedaron sin luz pues adeudaban el pago de las tarifas desde hacía meses, o de que por falta de sueldos cientos de policías descataron órdenes en otros departamentos del país⁵³, mostraban la situación de una institución cuyas necesidades deficientemente podían ser cubiertas por las arcas del Estado.

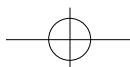
La policía, que enfrentó un conflicto con el gobierno por mantener en sus manos el Registro de Identificación Nacional, que le proporcionaba recursos, y se opuso al plan de reestructuración policial diseñado por el gobierno⁵⁴, padecía el déficit presupuestario del Estado. La privatización de las empresas estatales disminuyó los impuestos que estas aportaban al Tesoro General de la Nación, haciendo difícil solventar las necesidades de seguridad⁵⁵. Este es el referente histórico del amotinamiento policial de abril.

52 *Los Tiempos*, 26 de diciembre de 1999: A2.

53 *Los Tiempos*, 25 de noviembre de 1999: A.13.

54 *Los Tiempos*, 30 de noviembre de 1999: A.3.

55 En la actualidad, esta tendencia se ha ido acentuando, dando lugar al surgimiento de policías privados, como respuesta a la creciente delincuencia en el país.



RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

La crisis policial era una rotura junto a otros remiendos malcomidos que iban dejando desnudo el cuerpo macilento de la burguesía local en Bolivia. Por ejemplo, la mentada crisis del sistema de partidos políticos, como antesala del conflicto de abril, no era sólo una crisis de representación que se manifestaba en la abstención electoral o en el desprestigio de los políticos investidos de ministros, parlamentarios y alcaldes; era una brecha que se fue abriendo en aquellos escenarios dirigidos por los partidos de la burguesía criolla, que gracias a la Ley de Participación Popular, promulgada durante la gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (1993-1997)⁵⁶, penetraron en amplios sectores populares del Valle a través de la prebenda, controlando juntas vecinales, comités de vigilancia⁵⁷ y organizaciones territoriales de base campesinas.

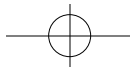
Días después del bloqueo campesino del Valle, el 14 de noviembre de 1999, la prensa revelaba que treinta y cinco de los sesenta y ocho cargos, al interior de la Federación de Juntas Vecinales, pertenecían a militantes de la Nueva Fuerza Republicana (NFR)⁵⁸. Frente a esta situación, se formó un “grupo de choque contra el monopolio político de la institución”, del cual posteriormente surgiría FEJUVE-Pueblo; que, unido a un grupo de juntas vecinales disidentes de NFRismo y casas comunales, participaron en las movilizaciones de abril.

A fines de noviembre, los vecinos del barrio Villa Sebastián Pagador encontraron el cuerpo sin vida de un dirigente vecinal en un canal de riego. Hacía meses atrás que el dirigente tenía conflictos en la casa comunal de Villa Pagador con militantes del NFR. Un cabildo abierto de aproximadamente 2 mil vecinos declaró que se trataba de un “asesinato político”, definiendo una colecta para contratar un

56 Una forma de descentralización de la administración de los recursos del Estado a través de los gobiernos municipales, que otorga el poder de administrar recursos en proyectos locales a juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil, que se constituyeron en Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). Los Comités de Vigilancia tienen la atribución de “vigilar que los recursos municipales de la Participación Popular sean invertidos equitativamente en la población urbana y rural, constituyendo el nexo para que las OTBs ejerzan sus derechos” (*Los Tiempos*, 14 de noviembre de 1999). La Ley de Participación Popular fue concebida como un “mecanismo de control social”, diseñado para sustituir la conflictiva representación sindical y comunal de los sectores populares (ver Martínez, 1996). Refiriéndose a ella, el entonces presidente Sánchez de Lozada dijo: “Es mejor que hagamos una revolución desde arriba, antes que se haga una revolución desde abajo” (citado por Martínez, 1996).

57 Las Juntas Vecinales son organizaciones barriales encargadas de velar por los intereses de los vecinos, relacionados a la seguridad del barrio, el alumbrado público, el alcantarillado y el conjunto de demandas, etcétera. Con la Ley de Participación Popular, fueron convertidas en OTB's.

58 *Los Tiempos*, 14 de noviembre de 1999. La NFR es el partido del entonces alcalde Manfred Reyes Villa, uno de los firmantes del contrato con Aguas del Tunari.



LORGIO ORELLANA AILLÓN

investigador privado que aclarara el asunto. Los vecinos amenazaron con no participar de las próximas elecciones municipales del 5 de diciembre si no se identificaba a los culpables del hecho, criticando a “los politiqueros que prometen mucho, pero en la realidad no hacen nada”⁵⁹. Paralelamente, los vecinos de Sebastián Pagador organizaron marchas de protesta alrededor de la alcaldía; y, el 19 de noviembre, micros de la línea P y R del barrio paralizaron el centro de la ciudad protestando por la “politización de la muerte de Cristóbal Villca”. En abril, Villa Sebastián Pagador sería uno de los más importantes frentes barriales de lucha contra el consorcio Aguas del Tunari.

Pero, además, preludio de las grandes movilizaciones de enero, febrero y abril por el agua, fueron las batallas campales de fines de noviembre, entre la policía y miles de comerciantes minoristas, motivadas por la recientemente aprobada Ley de Aduanas, que castigaba el contrabando decomisando los productos introducidos al país clandestinamente⁶⁰; el paro de los trabajadores de obras públicas municipales del 29 de noviembre, que exigían la dotación de ropa de trabajo, el respeto a su sindicato, el cumplimiento de sus beneficios sociales y el cese de amedrentamiento por parte de las autoridades municipales⁶¹; la marcha de los ahorristas inmobiliarios del 22 de noviembre⁶²; la huelga de hambre de doscientos funcionarios en la Caja Nacional de Salud, protestando contra la privatización de la institución; los bloqueos de calles por parte de funcionarios de la Caja, rentistas mineros y trabajadores de la COB, contra el Estatuto del Funcionario Público, la Ley de Aguas y la terciarización de la Caja⁶³; hasta hechos “accidentales” dentro de este conflictivo contexto, ocasionado por la política neoliberal, como la marcha de los vecinos de Vinto por la inoperancia de las autoridades, ante el abuso sexual de doce niños sordomudos en un centro cristiano, por un miembro norteamericano de la institución⁶⁴.

Este fue el terreno abonado de noviembre, que inauguró el bloqueo campesino regante; y en el cual emergió la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Desde julio de 1999, un Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, formado por profesionales ingenieros, había iniciado un proceso de discusión en seminarios, sobre los

59 *Los Tiempos*, 15 de noviembre de 1999.

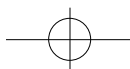
60 *Los Tiempos*, 25 de noviembre de 1999; *Los Tiempos*, 26 de noviembre de 1999.

61 *Los Tiempos*, 30 de noviembre de 1999.

62 *Los Tiempos*, 23 de noviembre de 1999.

63 *Los Tiempos*, 16 de noviembre de 1999.

64 *Los Tiempos*, 7 de noviembre de 1999.





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

riesgos que acarrearía entregar en concesión la administración del servicio de agua potable en Cochabamba (Assies, 2000; traducción nuestra). Comenzando septiembre, el Comité denunció a la prensa que, desde diciembre, las tarifas por el servicio de agua en la ciudad se incrementarían entre el 58% y el 110%⁶⁵.

Los regantes, que luego de aprobarse la Ley 2.029 iniciaron la búsqueda de nuevos aliados para “emprender actos de mayor envergadura” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 171), encontraron al Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, e iniciaron una serie de reuniones y asambleas en el local ofrecido por la Federación de Fabriles de Cochabamba. El 12 de noviembre, surgió la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida⁶⁶, con la presencia de veinte organizaciones, en su mayoría Asociaciones de Regantes; y, luego, Comités Cívicos Provinciales, el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Central Obrera Departamental, la Federación de Fabriles y la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba.

La formación de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida

Nuestro intento no es hacer una recapitulación histórica de los hechos que concluyeron en abril⁶⁷, sino tratar de entender qué fue la Coordinadora como forma organizativa de tipo político, que tenía a los campesinos regantes como a su “columna vertebral”, para así explicar las causas de su emergencia y caída. Algunos “veían a la Coordinadora como un proyecto de largo aliento”, argumentando que “la vida de la Coordinadora recién empezaba, y que su labor era expandir su capacidad de movilización y de ejercicio ciudadano de las funciones públicas” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 158); análisis que convirtieron a la Coordinadora en una especie de fetiche purgado de contradicciones. En realidad, las cosas sucedieron al revés de como se las planteó. La Coordinadora moriría poco después de concentrar a 100 mil personas en la plaza principal el 10 de abril por la tarde, para anunciar la salida de la transnacional Aguas del Tunari del país. Aquí, parece ser nuevamente cierto eso de que “el estadio o madurez más

65 *Opinión*, 14 de noviembre de 1999.

66 Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (2000:180).

67 Una cronología de los conflictos del año 2000 puede encontrarse en la recopilación de Miguel Villaroel en Laserna (2001: 20-35) y en CLACSO (2000).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

alto que puede alcanzar cualquier cosa es aquel en el que empieza a perecer” (Hegel, cita en Marcuse, 1971: 138); y, es a su vez, el momento en el que manifiesta su verdadera naturaleza⁶⁸.

La Coordinadora creció y se desarrolló en un ambiente de malestar social, signado por los conflictos anteriormente mencionados y el incremento del precio de los carburantes de fin de año⁶⁹, que fue respondido por un paro movilizado de 48 horas del transporte en el ámbito nacional⁷⁰, coordinado localmente con el Comité Cívico y la Central Obrera Departamental⁷¹. Meses atrás, los pasajes del transporte público habían subido debido a otro “gasolinazo”. La nueva medida supuso un reajuste de los pasajes, en un contexto ya bastante precarizado por la recesión económica⁷². Justamente a principios de diciembre, el superintendente de Agua Potable, Luis Uzín, anunció el incremento de las tarifas de agua, en un margen categorial que llegaba hasta el 100%⁷³.

La Coordinadora, que empezó congregando a una veintena de asociaciones de riego y comités cívicos provinciales, el día de su inauguración, el 18 de diciembre aglutinaba alrededor de cuarenta y cinco instituciones, entre centrales y subcentrales campesinas, asociaciones de riego, cooperativas de pozos, sindicatos agrarios y comités cívicos provinciales⁷⁴; luego de un paciente trabajo de explicación y propagandización del problema, iniciado por la Federación de Regantes y el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar. La Coordinadora era aquí, fundamentalmente, la unión de sindicatos y organizaciones de riego rural, interesados en preservar su propiedad y formas de gestión sobre el servicio del agua, frente al capital transnacional y los cuadros burocráticos del Estado, que impulsaban la privatización de los recursos hídricos de Cochabamba en beneficio del imperialismo; era, si se quiere, una lucha de clases entre los pequeños propietarios y los grandes propietarios; lucha que, para ser exitosa –y así lo comprendieron sus dirigentes– requería de una alianza con los sectores empobrecidos de las ciudades, afectados por el incremento de las tari-

68 “Las crisis y los colapsos no son accidentes ni perturbaciones, sino que manifiestan la verdadera naturaleza de las cosas” (Marcuse, 1971: 148).

69 *Los Tiempos*, 15 de diciembre de 1999: C5.

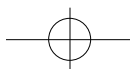
70 *Los Tiempos*, 16 y 17 de diciembre de 1999.

71 *Los Tiempos*, 16 de diciembre de 1999.

72 *Los Tiempos*, 19 de diciembre de 1999.

73 *Los Tiempos*, 2 de diciembre de 1999.

74 Ver Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (2000: 197-199).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

fas de agua potable y la obligatoria instalación de medidores en pozos privados, a cargo de Aguas del Tunari.

“La Central Obrera Departamental, la Federación de Trabajadores Fabriles, Asociación de Usuarios la Angostura, Federación de Maestros Urbanos, Comités Cívicos Provinciales, Federación de Regantes, Comité Cívico de Defensa Ambiental de Cochabamba, Asamblea de Derechos Humanos, Asociación de Perforadores de Pozos, Federación de Juntas Vecinales-Pueblo, Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar y Organizaciones Territoriales de Base y sindicatos agrarios amenazaron con una ‘resistencia civil’ a la Ley de Servicios de Agua Potable”⁷⁵.

Fue en el contexto de una serie de conflictos aislados, algunos más o menos duraderos, otros postergados, que el 21 de noviembre la Coordinadora debutó en las calles organizando una masiva movilización, junto a la Federación del Autotransporte, la Federación de Juntas Vecinales, la Federación de Maestros Urbanos⁷⁶ y otros sectores.

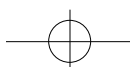
Fisuras en el seno de la Federación de Juntas Vecinales, la Federación del Autotransporte y rupturas con el Comité Cívico⁷⁷, ya a fines de diciembre, iban perfilando la dirección regional, para encarar las luchas contra la Ley 2.029 y el contrato de concesión con Aguas del Tunari. Los representantes de la Coordinadora exigieron la renuncia del presidente del Comité Cívico y nuevas elecciones en la institución. “El tarifazo de agua potable y alcantarillado está dividiendo a las instituciones cochabambinas. La mayoría está optando por el camino de las protestas bajo la batuta del Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, mientras el Comité Cívico, FEJUVE y algunos parlamentarios han elegido otro sendero que, aparentemente, se dirige hacia las puertas del parlamento”⁷⁸. En abril de 2000, el Comité Cívico sería prácticamente disuelto por las masas; mientras que el transporte pesado sería aliado de las movilizaciones, el transporte urbano saldría de las calles a pedradas; y un sector de las juntas vecinales y comités de vigilancia

75 *Los Tiempos*, 21 de diciembre de 1999: C1.

76 *Los Tiempos*, 22 de diciembre de 1999: C1, 2.

77 El ex-presidente del Comité Cívico, Mauricio Barrientos, militante de la NFR, también firmó el contrato de concesión con Aguas del Tunari. Después renunciaría para presentarse a las elecciones municipales. Tradicionalmente, el Comité Cívico ha sido portavoz de los intereses empresariales en la región. Durante el conflicto, las acciones del Comité se orientarían a desprestigiar a la Coordinadora e intentar reconducir la dirección del movimiento regional en términos *aceptables* al gobierno. El día de fundación de la Coordinadora, el Comité Cívico fue desconocido y la dirección de FEJUVE fue acusada de “divisionista” (Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, 2000: 180).

78 *Los Tiempos*, 27 de diciembre de 1998: A1.





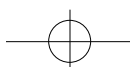
pasarían a las filas de la movilización. Claro que esto no se definió en las mesas de negociación, sino en las calles.

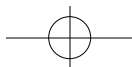
La “constitución de la multitud” –si se puede llamar así lo que pasó en febrero y abril– no fue el “resultado de un largo y paciente trabajo de interunificación de confianzas, apoyos mutuos, liderazgos y solidaridades trabajadas a escala local” (García, 2001: 54); ni la habilidad de los dirigentes fabriles fue “haber propuesto formas de adhesión urbanas y una estructura de organización capaz de abarcar a ese conglomerado de pobladores y trabajadores que sólo poseen una identidad y filiación territorial”, rompiendo “ese terrible desencuentro histórico que la COB no pudo superar... unificando a trabajadores del campo con trabajadores de la ciudad; transportistas con vendedoras de los mercados” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 172). Al sostener tal cosa, se convirtió a los hombres concretos en macrosujetos capaces de realizar tareas que las clases sociales no pudieron, dejando sin resolver el problema de la formación de la Coordinadora.

En realidad no fue una cuestión de “interunificación de confianzas, apoyos, solidaridades, liderazgos”, sino del momento preciso en que tales alianzas dirigenciales se dieron; no fue que el dirigente fabril Oscar Olivera planteó una estructura capaz de abarcar al conglomerado de trabajadores, sino que fue la misma movilización de masas la que creó un órgano de poder diferente al que los teóricos de la “forma multitud” se imaginan; no fue el “horizonte interpretativo” de “un mando obrero” el que propició una alianza de clases que la COB no pudo realizar, sino que fueron las experiencias de luchas precedentes, de transportistas y comerciantes, de campesinos regantes y trabajadores de la ciudad, sus fracasos sectoriales, su debilidad singularmente asumida, lo que los llevó a unirse y a *apropiarse* de la Coordinadora.

Esto no significa que las direcciones carecieran de papel alguno en el desarrollo del movimiento, sino que sus acciones potenciaron una tendencia que se venía desarrollando objetivamente, pero que tampoco necesariamente iba a culminar en un abril. Aquí, las direcciones efectivamente tuvieron un papel *activo*, pero no sólo porque *actuaron* en el marco de un determinado *estado de ánimo* de las masas y una determinada situación política, sino también porque *activaron* instintos, intereses, pasiones, sentimientos; procesos que ya existían y se desarrollaban independientemente de los *mandos*.

En este sentido, la cuestión tampoco es resuelta otorgando un peso sobredimensionado al uso de los medios de comunicación por





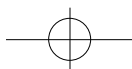
RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

parte de la Coordinadora, como si se tratara del uso mediático que hacen los nuevos movimientos sociales que resisten a la globalización⁷⁹; se trata de ver en qué medida el uso de la prensa fue uno de tantos otros medios existentes para *activar*.

Había entonces, efectivamente, un proceso de alianza de direcciones campesinas, fabriles, cívicas provinciales, vecinales, profesionales, que se llama Coordinadora y que no suponía directamente la unión de las clases; a excepción de los campesinos regantes, que venían actuando desde noviembre como clase y habían vivido “Guerras por el agua” precedentes. A través de asambleas, reuniones, informes mediante la prensa, la radio; denuncias sobre el papel “traidor” del Comité Cívico y la alcaldía en la firma del contrato; denuncias sobre las intenciones de instalar medidores en los pozos privados y cobrar a sus propietarios 80 dólares; informes sobre un contrato fraudulento que suponía financiar la construcción del proyecto MISICUNI con el incremento de las tarifas de agua en Cochabamba; la quema de facturas que mostraban el incremento tarifario excesivo, facilitadas por cientos de ciudadanos; acciones tomadas en una *coyuntura específica* y en un *momento preciso*, hicieron que la Coordinadora adquiriera autoridad moral y se convirtiera en un instrumento de movilización y unificación, un canal de expresión de reivindicaciones no satisfechas, ante el vacío de dirección dejado por el Comité Cívico y la Central Obrera Departamental. En las calles será parida la *nueva Coordinadora*, no la que fue nominada por los acuerdos dirigenciales, sino la que renació como criatura de las masas, como órgano de poder⁸⁰.

79 A nuestro criterio, de manera forzada, Crespo (2000) sigue a Castells y Touraine, en su análisis sobre la Coordinadora y los nuevos movimientos sociales. Por ejemplo, Castells (1998) hacía referencia al uso de armas y atentados terroristas, por los “nuevos movimientos sociales contra la globalización”, indicando que dichos actos, más que ser activados con el propósito de llevarse hasta las últimas consecuencias, fueron hechos para llamar la atención de los medios de comunicación. Un efecto “teatral” realizado por focos aislados, a mi juicio, incomparables con la contundencia de la rebelión de abril, que al final exigía *la cabeza de Bánzer*. Durante la “Guerra del Agua”, el método fundamental no fue mediático, sino la acción directa *de masas*, que afectaba de manera radical al orden social en su conjunto; es decir, su *espectacularidad* fue un hecho derivado. En tal sentido, el uso de *nuevas tecnologías* fue secundario e inexistente en el área rural, donde el campesino apenas alcanza a tener una pequeña radio.

80 En realidad, la Coordinadora de febrero y abril no fue una “inédita forma organizativa” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000). Órganos de poder y dualidad de poderes han habido desde que hay movimientos revolucionarios. En Bolivia se vivió tal cosa cuando Zarate Willca, ante la traición de las *élites* liberales, decidió refundar el imperio del Kollasuyo; la misma Central Obrera Boliviana nació en 1952 como órgano de poder paralelo al Estado; y la clase obrera fundó, en 1970, la Asamblea Popular, formada por diputados obreros. En el plano internacional, hubo órganos de poder en la revolución inglesa del siglo



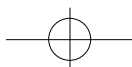


LORGIO ORELLANA AILLÓN

Pero aclaremos una cosa más, la base material de la Coordinadora, la unificación que se realizó alrededor de intereses concretos, fue fundamentalmente una unidad de organizaciones campesinas de riego, sindicatos agrarios, cooperativas de pozos, comités de agua; con representantes profesionales, fabriles y regantes, articulados coyunturalmente por el problema del agua en Cochabamba, suscitado a raíz de la aprobación de la Ley 2.029 y el contrato con el consorcio Aguas del Tunari. Como veremos, la movilización social la transformará en otra cosa, algo cuya esencia se hallaba en la acción directa de masas, más que en las alianzas coyunturales de las direcciones; de ahí que cuando vino el reflujó de las aguas, después que Aguas del Tunari partió y se revisó la Ley 2.029, la Coordinadora se convirtió en una superestructura vacía colgada del aire, en una sigla. Fue equivocado decir: “la pérdida de centralidad organizativa por parte del mundo del trabajo sindicalmente organizado comienza a ser revertida por la emergencia de inéditas formas organizativas capaces de cobijar la moderna obrerización híbrida de la población urbana” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 148); no al menos por la vía de la Coordinadora.

A diferencia de la Coordinadora, la fortaleza organizativa de la Central Obrera Boliviana anterior a 1986, en los momentos de reflujó, seguía asentándose en la base material del proletariado, el minero y el fabril en particular. Después de abril de 2000, cuando las masas abandonaron las calles, la Coordinadora volvió a ser menos de lo que era antes de que estas salieran a la movilización. Los campesinos retornaron a gestionar sus intereses inmediatos, a través de las organizaciones de riego, los sindicatos agrarios; y, en los barrios, se hizo de igual manera, a través de los comités y cooperativas de agua, sin

XVI, en la revolución francesa del siglo XVIII, en la Comuna de París de 1871 (ver Trotski, 1985: 178-179); y en las rebeliones y revoluciones obreras de inicios del siglo XX. “¿En qué consiste la dualidad de poderes? En que junto al Gobierno Provisional, gobierno de la *burguesía*, se ha formado *otro gobierno*, débil aún, embrionario, pero existente sin duda alguna y en vías de desarrollo: los soviets de diputados obreros y soldados ¿Cuál es la composición de clase de este gobierno? El proletariado y los campesinos... ¿Cuál es el carácter político de este gobierno? Es una dictadura revolucionaria, es decir, un poder que se apoya directamente en la conquista revolucionaria, en la iniciativa directa de las masas populares desde abajo, y *no en la ley* promulgada por el poder centralizado del Estado... *Este poder es del mismo tipo* de la Comuna de París de 1871. Los rasgos fundamentales de este tipo de poder son: 1) la fuente del poder no está en una ley, previamente discutida, y aprobada por el parlamento, sino en la iniciativa directa de las masas populares desde abajo y en cada lugar, en la ‘conquista’ directa del poder, para emplear un término en boga; 2) sustitución de la policía y del ejército, como instituciones apartadas del pueblo y contrapuestas a él, por el armamento directo de todo el pueblo; con este poder guardan el orden público los *propios* obreros y campesinos armados, el propio *pueblo* en armas; 3) los funcionarios y la burocracia son sustituidos también por el poder directo del pueblo” (Lenin, 1987: 38-39).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

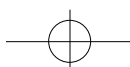
que tuvieran necesidad alguna de ser aglutinados alrededor de la Coordinadora.

Esto revela que la base de un órgano de poder es su estructura material de clase; a lo que podría añadirse una base territorial (García, 2001); y la condición es el estado de ánimo de las masas, el momento y la situación política por la cual atraviesan. Mientras que durante la “Guerra del Agua”, en el campo la base material eran los campesinos regantes y en las ciudades las organizaciones barriales, comités y cooperativas de agua, la base material de la asamblea popular de 1970 era el proletariado minero. La sola existencia de tales estructuras no hacía tales órganos de poder; para ello debían mediar determinadas condiciones sociales y políticas que, para el caso de abril, las hemos descrito precedentemente.

De ahí que sea especulativo y artificial decir que una forma de superar el déficit organizativo de la Coordinadora, “quizás vaya por la consagración, institucionalización y ritualización simbólica de las asambleas locales y regionales existentes como asambleas instituidas de la Coordinadora, la regularización de una asamblea departamental con un mínimo de delegados seguros a los que pudieran incorporarse otros en cualquier momento y la implementación de mecanismos de elección y revocabilidad de dirigentes” (García, 2001: 153). La gente no se reúne por la ocurrencia del intelectual, sino por sus necesidades concretas; mientras que la Coordinadora de febrero y abril no fue un hecho *formal, administrativo*, si no *de facto*, surgido de la acción directa de masas. Veamos.

En una asamblea del lunes 10 de enero de 2000, convocada por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, se decidió iniciar un bloqueo de caminos en el departamento y en los principales puentes de la ciudad; bloqueo que se inició el 11 de manera contundente, en las carreteras que unen la ciudad con el resto del país, por los campesinos regantes. Durante los dos días siguientes se fue incorporando la ciudad.

“Ese día, el bloqueo de caminos en las áreas rurales fue total... En la ciudad, no todos acataron la medida ese día, pero al día siguiente y el jueves el autotransporte urbano fue paralizado en su totalidad... Las carreteras troncales entre Cochabamba-Oruro-La Paz y Santa Cruz estuvieron interrumpidas desde las primeras horas de ayer martes, y en la terminal de buses miles de pasajeros permanecieron inmobilizados... En los puntos de protesta se podía apreciar una efectiva presencia de campesinos, jóvenes y niños, quienes se dieron modos para colocar neumáticos, ramas de espinos y otros objetos contunden-





LORGIO ORELLANA AILLÓN

tes sobre la carretera Cochabamba-La Paz. El anuncio de sacar efectivos militares y policiales a las vías troncales fue sólo una amenaza, porque en el recorrido que hizo Los Tiempos no ubicó a un sólo uniformado. Todos habían sido concentrados en la ciudad de Cochabamba. En los puntos de bloqueo de Colcapirhua estaba 'prohibido circular', ya sea con bicicleta o motos, pues los bloqueadores no permitieron, bajo ningún motivo y pretexto, el paso de vehículos. Lo mismo sucedió en Sacaba. Pero el día más conflictivo fue el jueves, día en el que 22 personas fueron detenidas, miles de manifestantes fueron gasificados y el edificio de la prefectura fue apedreado"⁸¹.

La medida fue acompañada por un paro del Comité Cívico que, a esas alturas, era apenas capaz de dirigir efectivamente al transporte urbano. El martes la ciudad amaneció sin movimiento, pero tampoco bloqueada. Paulatinamente, se irían incorporando pequeños piquetes de vecinos que acudieron al llamado de la Coordinadora. En las zonas periurbanas algunas juntas vecinales iniciaron bloqueos; y más comités de defensa del agua potable.

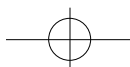
Las demandas de la Coordinadora eran: "Derogar la Ley de Agua Potable 2.029... la nulidad del contrato de concesión con Aguas del Tunari, en contra de la Ley de Aguas... El bloqueo es también una protesta por el alza del costo de vida. No podemos permitir que siga subiendo la gasolina, el diesel, que suban los pasajes, que suba la energía eléctrica"⁸². Un gran cabildo del 14 de enero realizado en la plaza principal⁸³ ratificó estos puntos⁸⁴, a lo que se añadió pasar la administración del agua potable a un órgano autogestionario del pueblo.

81 *Los Tiempos*, 16 de enero de 2000.

82 Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y la Vida (2000: 209).

83 Ver *Los Tiempos*, 16 de enero de 1999.

84 Por eso es falsear la realidad decir que los cochabambinos decían "no al contrato de concesión del agua cochabambina a la empresa Aguas del Tunari, no a una ley de agua potable que ignora los derechos, esfuerzos, usos y costumbres de la población" (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 140). No sólo que en el cabildo del 14 las demandas de los ciudadanos habían sido categóricas, NO al contrato, NO a la ley, sino que las mismas asambleas anteriores de la Coordinadora lo decían así. Este aspecto es fundamental, pues posteriormente los representantes de la Coordinadora, descatando las resoluciones del cabildo, de manera contradictoria, unas veces enarbolaban la "revisión" del contrato con Aguas del Tunari; y otras, su anulación. Así, el comunicado N° 15 de la Coordinadora dice: "Nosotros queremos decir claramente y lo hemos señalado así en una carta enviada al Presidente, de que el tema del agua debe ser necesariamente discutido empezando por la ley de agua potable y alcantarillado sanitario, luego *revisar el contrato* y finalmente *establecer un nuevo régimen tarifario* que permita la concreción del proyecto múltiple Misticuni y las posibilidades de la población, *no hay otra alternativa*" (Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, 2000: 234, cursivas nuestras). Al final se definirían por "revisar" la ley y anular el contrato.





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

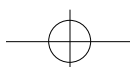
“Las aproximadamente 10 mil personas que participaron de la marcha [...] también otorgaron toda la potestad a la Coordinadora como su legítima representante ante cualquier diálogo y negociación con los ministros del Estado”⁸⁵. Nuevos sectores se fueron plegando a la movilización, para formar parte de la Coordinadora. Imposibilitados de volver a sus casas por el paro del transporte, una gran congregación de personas formó brigadas de vigilia en la plaza principal, antesala a la llegada de los ministros. En el transcurso del día se iniciaría un combate en las calles de la ciudad con las fuerzas represivas del Estado, que despejaron la plaza.

La Coordinadora empezó sus movilizaciones convocando alrededor de 10 mil personas en un cabildo; la voz de mando de una asamblea, que bajó a través de las organizaciones de riego, comités y cooperativas de agua, adquiriría autoridad regional y con el tiempo empezaría a cumplir funciones de gobierno. En enero se manifestaron los primeros rasgos de que la Coordinadora tendía a convertirse en un órgano de poder de masas.

El proceso se inició en sentido descendente, es decir, como una serie de reuniones y asambleas de dirigentes, reuniones y asambleas entre las direcciones de la Coordinadora y las direcciones intermedias de Comités de Riego, Cooperativas, Comités de Agua, etc., hasta reuniones y asambleas con las bases; en las marchas, las asambleas y el cabildo, en los enfrentamientos con la policía, a la vez que las consignas se fueron convirtiendo en fuerza material, las masas empezaron a *apropiarse* de la Coordinadora; y, al hacerlo, comenzaron a transformarla, sobrepasando los estrechos límites de las organizaciones de riego, comités, cooperativas, etc. que no podían contener en sus estrechos marcos la afluencia de más sectores, por muy flexibles que estas organizaciones fueran.

Así, en esta fase del movimiento, empezó a negarse dialécticamente la Coordinadora (que seguía llamándose Coordinadora) y el proceso adquirió un sentido ascendente, se desarrollaba bajo iniciativa directa de las masas: “sinnúmero de bloqueos... una enorme cantidad de bloqueos pequeños, de vecinos, de trabajadores por cuenta propia, de gente pobre” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 138) que, sin pertenecer a comité de agua alguno, pero que eran afectados por el “tarifazo”, asumían el llamado a bloquear, respondían a una voz de mando, que surgió de la última asamblea de la Coordinadora. La obe-

⁸⁵ *La Prensa*, 14 de enero de 2000.



diencia a dicha resolución evidenciaba que la Coordinadora se estaba transformando en un representante legítimo, que podía hacer efectivas las resoluciones tomadas en las asambleas de la Federación de Fabriles; comenzaba a transformarse en un órgano que legislaba los asuntos colectivos, a la vez que los ejecutaba a través de la movilización, funciones gubernamentales que se fueron consolidando en el transcurso de los siguientes dos meses.

Esa dialéctica del proceso permaneció latente luego de la firma de un convenio entre la Coordinadora y las autoridades del gobierno, “cuando cuatro ministros de Estado y representantes de diferentes organizaciones llegaron a un acuerdo”⁸⁶. Allí se acordó que se formarían comisiones para discutir las leyes y el contrato de concesión⁸⁷. Con relación a las demandas de los movilizados, nada se consiguió, más que la promesa de discutir las leyes y el contrato en comisiones. Luego de una conflictiva asamblea, donde los representantes de la Coordinadora informaron sobre los términos del acuerdo, impusieron el levantamiento de las medidas de presión. Más allá de las maniobras dirigenciales, lo importante de la movilización fue que la gente adquirió en las calles mayor conciencia de su fuerza y de su unidad, sintetizada en la *nueva Coordinadora*.

La previsible esterilidad de los comités de negociación condujo a la organización de una movilización de mayor envergadura, denominada “toma pacífica de Cochabamba”, que incluía el desplazamiento de los campesinos de las provincias hacia la ciudad, al igual que la organización de marchas que partirían desde distintos puntos de la urbe hasta la plaza principal, donde todos deberían reunirse. Alrededor de quinientos efectivos, entre policías y militares, fueron traídos aquel día para reforzar los aparatos represivos de Cochabamba y controlar la “toma pacífica”.

“Las principales carreteras que conducen hacia Cochabamba aparecieron ayer bien resguardadas. Los uniformados del ejército controlaban Colomi, la Angostura [Valle Alto] y Parotani [Valle Bajo]. Si no lo hacían, la ciudad habría sido tomada por campesinos... En el Oeste [la conexión con el Valle Central], los manifestantes sobrepasaban lentamente a los efectivos en el Viaducto. Cuando lo lograron ya

86 *Los Tiempos*, 16 de enero de 2000.

87 Es un simple juego de palabras ajeno a los hechos decir que la victoria de enero fue “lo nuestro sigue siendo nuestro, el contrato de concesión del agua, la ley de agua potable, la futura ley del agua, se discute a partir de seguir sumando fuerza” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 140). La ley y el contrato seguían vigentes, por tanto, el agua *ya no era nuestra*.



RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

tenían suficientes ganas como para anular las barricadas policiales en el puente de Quillacollo y en la plazuela Corazonistas. Por fin, llegaron a la Heroínas y Ayacucho, a tres cuadras de la plaza 14 de septiembre [la plaza principal] y allí se parapetaron. En el Este, otro grupo de aproximadamente 5 mil campesinos que habían llegado de Sacaba [Valle Alto], después de sortear un muro verde en la Muyurina, tomó la avenida Ramón Ribero, la Oquendo y llegó hasta la Heroínas y Antezana. Por el puente Muyurina en el sector Este, alrededor de 7 mil cocaleros ingresaron a la ciudad pacíficamente, pasando por el cerco policial. Sin embargo, en inmediaciones de la plaza policial los productores de coca fueron también reprimidos. En el Sur, 10 mil campesinos del valle alto eran controlados a la altura de la terminal de buses. La policía estaba cercada. Cientos de efectivos custodiaban las cuatro esquinas de la plaza central y otras decenas combatían en las calles aledañas”⁸⁸.

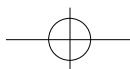
En la ciudad, miles de jóvenes, atrincherados en cientos de barricadas, distribuidas en distintas esquinas del centro de Cochabamba y las zonas periurbanas, combatían a “los dálmatas”, policías traídos desde La Paz para reprimir la “toma”, ante la falta de autoridad que los altos mandos tenían sobre una policía local disconforme y hambrienta. Un coronel y un capitán solicitarían al ministro de Gobierno que permitiera ingresar a la multitud a la plaza, pues supuestamente la marcha iba a ser pacífica.

“Tras la jornada violenta del viernes y ya en horas de la noche cuando se produjeron los más fuertes enfrentamientos, nuevamente la representación policial cochabambina pidió al Ministro cesar la dura represión argumentando que fue indiscriminada, pero estos fueron duramente recriminados por Guiteras y hasta amenazados con ser echados si no cumplían sus órdenes”⁸⁹.

Luego del conflicto, policías de bajas gradaciones como altos jefes, que no quisieron revelar sus nombres a la prensa, indicaron su malestar por los bajos salarios que recibían y la inexistencia de cascos de protección, máscaras antigases y escudos protectores en sus garniciones para enfrentar las movilizaciones. Paradójicamente, el gobierno trasladó a “los dálmatas” desde La Paz y trajo pertrechos que en el lapso de dos días supusieron un gasto de 100 mil dólares. Un policía que pidió no ser identificado declaraba a la prensa: “Por qué

⁸⁸ *Los Tiempos*, 5 de febrero de 2000.

⁸⁹ *Los Tiempos*, 8 de febrero de 2000.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

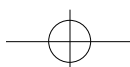
mejor no nos aumentan el sueldo, en vez de gastar tanto dinero en estas armas y proyectiles”⁹⁰. Policías disconformes, que denunciaban no haber comido durante los días del conflicto, ni haberse bañado durante los días de la rebelión, durmiendo sin cambiarse, revelaban el malestar existente al interior de las fuerzas policiales, signos que adquirirían cuerpo en el amotinamiento policial de abril.

Sobre la base de estas referencias, *maticemos un poco* entonces. La rebelión social de febrero no fue “un cuerpo y unas prácticas de soberanía asentadas en premisas no estatales” o la momentánea “desestatización de la vida pública” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 19); ni tampoco se puede negar que había “un mando que convoque” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 146) a la rebelión; y es impreciso decir que por unas horas, el Estado se redujo “a su tropa encerrada en la Plaza”. En realidad, el desequilibrio social en Cochabamba inició un proceso de ruptura en la superestructura estatal burguesa, ante la emergencia de una nueva forma de centralización que surgía de la movilización directa de las masas, “las clases adversas se apoyan ya en organizaciones estables sustancialmente incompatibles entre sí y que a cada paso se eliminan mutuamente” (Trotsky, 1985: 178) en la dirección de la región, en este caso. La Coordinadora, convertida en un órgano de centralización que convocaba a la deliberación y toma de decisiones a través de los cabildos y las asambleas, y su respectiva ejecución a través de monumentales marchas, violentas confrontaciones con la policía y el ejército, empezó a adquirir los rasgos de una nueva forma estatal.

Es un error “federalista” creer que la centralización sólo viene desde arriba⁹¹; con la Coordinadora, las masas, a su modo, construyeron una forma diferente de centralización, al percibir que sólo su unidad, bajo un mando único, podía expulsar al consorcio Aguas del Tunari y anular la Ley 2.029. Es impreciso indicar que “la fuente de autoridad centralizada del Estado comenzó a desvanecerse para quedar depositada en múltiples nudos de autoorganización barrial y local” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000). Mas bien la autoridad estatal empezó a desvanecerse para quedar depositada en una nueva forma de centralización “gubernamental” creada durante el conflicto, la Coordinadora; que, es cierto, no se asentaba sobre un orden burocrá-

90 *Opinión*, 8 de febrero de 2000.

91 “Para Engels, el centralismo no excluye en lo más mínimo esa amplia administración autónoma local, que, con la defensa voluntaria de la unidad del Estado por las ‘comunidades’ y las regiones, elimina en absoluto todo burocratismo y todo ‘mando’ desde arriba” (Lenin, 1987: 332).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

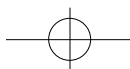
tico, sino sobre las asambleas, los cabildos, los “nudos de autoorganización barrial y local” y la iniciativa directa de las masas, que se desarrollaban durante la movilización social.

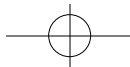
En un avanzado proceso de gestación, en febrero, y sobre todo en abril, se fueron perfilando los embriones de un nuevo Estado, con estructuras legislativas y a la vez ejecutivas, asentado sobre la democracia directa, con representantes que respondían a mandato imperativo; una forma que buscaba consolidar su fisonomía, disolviendo los aparatos represivos del Estado. En abril esta tendencia se fue perfilando en los constantes intentos por tomar la Séptima División del Ejército y la toma física de las oficinas de la policía; a lo que debe sumarse el malestar policial, mostrando que en el desarrollo del conflicto que se inició en febrero, incluso los brazos represivos del Estado burgués empezaban a rajarse.

¿De haber adquirido forma definitiva esta tendencia –“la sustitución de la policía y el ejército por el pueblo armado”– no habría sido acaso una nueva forma estatal, una nueva forma de centralización que se asentaría sobre la democracia y acción directas, y sobre la represión de la minoría por la mayoría de la sociedad?

El “autoritarismo” de las clases populares frente a las minorías privilegiadas de la sociedad cochabambina, fue una de las características de este proceso insurreccional: fueron las movilizaciones sacadas de las calles a pedradas; las tiendas, los bancos y los negocios de quienes no acataban el paro que fueron cerradas a pedradas por los marchistas; los edificios privados a medio construir invadidos por los manifestantes para la provisión de piedras destinadas a enfrentar a la policía; los empresarios que tenían que botar sus pollos podridos ya que no podían trasladarlos para venderlos; y la empresa privada en su conjunto, que no pudo realizar la venta de sus mercancías.

Puede decirse que era un estado de sitio impuesto por la movilización de masas, un acto de autoridad que emergía de la mayoría de la sociedad cochabambina y se ejercía sobre sus minorías privilegiadas, que observaban el conflicto por la televisión, atemorizadas desde los barrios residenciales de la zona Norte, y aquellas pocas minorías de la clase media, que se hallaban ajenas al conflicto y no respetaban las resoluciones de las asambleas y los cabildos. Los temores del pensamiento liberal, respecto al ejercicio de la dictadura, de la mayoría de la sociedad sobre la minoría, encuentran aquí una cabal expresión. Contradictorio que este haya sido el momento más democrático vivido por la sociedad cochabambina durante toda su historia.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

El conflicto de febrero concluyó en el congelamiento de las tarifas de agua potable. Una bulliciosa multitud de cochabambinos ingresaría el 5 de febrero a la plaza principal para festejar la *victoria*, aunque el contrato con Aguas del Tunari y la Ley 2.029 permanecían vigentes. Anuncios posteriores de que el incremento de las tarifas continuaría condujeron a la preparación de la “Batalla final por el agua”, un “Bloqueo general indefinido del departamento y la ciudad, a partir de las 6:00 del día 4 de abril de 2000”: “Este bloqueo se realizará en las provincias con el bloqueo de caminos y en la ciudad con el bloqueo de calles, avenidas y puentes, en cada barrio y en cada casa... Se constituye el Comité de Bloqueos y movilizaciones tanto en el ámbito urbano, provincial, barrial y comunitario, de acuerdo a lo dispuesto en la Asamblea, con todas las características señaladas en la misma”⁹².

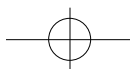
Aunque el gobierno había realizado una intensa propaganda de desinformación, el martes la ciudad despertó paralizada. “Los pocos comercios y empresas que inicialmente abrieron sus puertas, cerraron hasta mediodía. Los caminos se llenaron de barricadas y los accesos a los barrios populares del sur eran bloqueados con ramas, palos, vidrios y piedras. No había importado la retórica ni la infamia gubernamental contra la Coordinadora” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 153). En los barrios y las comunidades, los bloqueos se organizaron a través de turnos de vigilancia, la rotación de comunidades y familias para hacerse cargo del bloqueo y la alimentación de los bloqueadores.

“[C]ampesinos y bloqueadores se organizaron en grupos de 50 y 300 personas para hacerse cargo, cada ocho horas, de los bloqueos de las principales carreteras. Por el lado este de la ciudad, en el kilómetro 5, del camino antiguo a Santa Cruz, los vecinos del barrio San Miguel decidieron no dar paso ni a bicicletas ni a motos. De esta manera quedó interrumpido el tráfico normal hacia poblaciones del Valle Alto. Por el sector oeste, los pobladores de Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y Parotani (Valle Bajo) también impidieron el paso de bicicletas y motos. Sobre la carretera Cochabamba-Parotani el bloqueo no fue total, pero entre Sacaba y Melga la situación se mantiene inalterable, al extremo de que los campesinos se organizaron con palos y dinamitas”⁹³.

Otro medio de prensa mostraba un panorama más completo sobre el bloqueo campesino en los valles, que se inició el martes 4 de abril: “El sector del Valle Alto se encuentra totalmente bloqueado en

92 Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y la Vida (2000: 249).

93 *Los Tiempos*, 6 de abril de 2000.



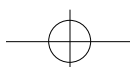


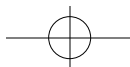
RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

diferentes puntos estratégicos, determinados por el Comité Impulsor del Proyecto Quewiñacochoa [...] 'con el eslogan (vivir o morir), nuestro primer bloqueo está instalado en Rodeo, cantón del municipio de Vacas, donde cerca de 500 compañeros no dejan pasar ni una sola bicicleta proveniente del Cono Sur. De igual manera, la población arañeña ha salido a bloquear la avenida principal que une esa provincia con Punata. Lo mismo ocurre con los productores agropecuarios de Paracaya, San Benito, Tolata, Cliza, Arbieta y Tarata, quienes salieron hasta la carretera Cochabamba-Paracaya para dejar intransitable esta importante arteria'. A la altura de Colomi, se halla instalada una barricada de bloqueo, protagonizado por más de 200 cocacultores del Trópico cochabambino y miembros de la Central campesina colomeña, que en forma indefinida interrumpen el tramo Cochabamba-Chimoré, desde el pasado martes 4. De igual forma, los campesinos de la provincia Tiraque, llevan adelante el bloqueo de las vías principales que conducen a Punata y a la población Aguirre, ubicada a 15 kilómetros de Colomi. Más adelante, en Melga, más de 500 trabajadores de la tierra, obedecen fielmente la instructiva de la Coordinadora, bloqueando el camino hasta el sector de Chinata. Como se había anunciado, un buen número de campesinos del Trópico, están paralizando el tráfico vehicular sobre el puente de Muyurina y el ingreso Sacaba-Cochabamba.

La Avenida Blanco Galindo, se encuentra totalmente interrumpida por los diferentes piquetes de bloqueos, protagonizados por los regantes de Sait'uqhocho y vecinos de los diferentes barrios que se encuentran a lo largo de este tramo. El primer bloqueo está ubicado en el Viaducto del Hipódromo, por las movildades de la Federación Departamental de Transporte; el segundo, se encuentra en el reducto de Colcapirhua, donde más de 500 regantes llevan adelante la interrupción total de la Avenida; un tercer bloqueo está registrado sobre el río Huayculi, realizado por vecinos de Piñami y Cotapachi; más allá en el cruce de Vinto-Pairumani se encuentra otra de las barricadas del Valle Bajo, con más de 300 personas. El bloqueo más numeroso del departamento está ubicado en la población de Parotani, donde cerca de 1.500 campesinos de Capinota, Tapacarí, Bolívar, Arque y Ayopaya, salieron hasta la avenida Cochabamba-Confital, para interrumpir el paso de movildades, cumpliendo estrictamente las determinaciones de la Coordinadora y la Federación de Campesinos"⁹⁴.

94 *Gente*, 6 de abril de 2000.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

Luego de los bloqueos contundentes del 4 en las provincias y las zonas periurbanas de la ciudad, la Coordinadora convocó a profundizar las medidas de presión en el centro de Cochabamba, así como a realizar marchas que deberían partir, desde diferentes puntos de la ciudad, confluyendo en un gran cabildo en la plaza principal. El 5 se congregaron alrededor de 15 mil trabajadores, vecinos de las zonas periurbanas, comerciantes, campesinos y universitarios, quienes definieron la ocupación inmediata del Comité Cívico y las dependencias de Aguas del Tunari. El cabildo definió dar 24 horas a la transnacional para retirarse.

El movimiento, sin embargo, desarrollaba una contradicción interna. A diferencia de los campesinos, que podían sostener prolongadas movilizaciones puesto que ellos mismos obtenían sus medios de subsistencia, de la tierra mayormente, los comerciantes, artesanos y demás trabajadores por cuenta propia, que vivían de lo que vendían y producían al día, no tenían la posibilidad de resistir un largo conflicto, viéndose en la necesidad de abrir sus negocios y abandonar temporalmente la movilización. El 6 de abril “no más de 5.000 hombres y mujeres se reunieron en la plaza principal”, con quienes se organizó un “cerco” a la prefectura para vigilar las negociaciones entre el gobierno y los representantes de la Coordinadora

Fue, efectivamente, el momento de mayor debilidad de la movilización en la ciudad, tendencia que se fortaleció al aproximarse la noche “cuando no más de 1.500 personas vigilan la entrada de la prefectura y la policía” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000). Hubo, sin embargo, un hecho que modificó el desarrollo de los acontecimientos. Mientras se reunían en la prefectura los representantes de la Coordinadora y el gobierno, sorpresivamente ingresó la policía para detener a los dirigentes, acción que al ser difundida por la prensa, provocó la indignación generalizada y la reactivación de los bloqueos urbanos al día siguiente.

“Error”, “incapacidad del gobierno”, dijeron algunos. Pero la acción gubernamental en sí misma no se explicaba por “la improvisación y tozudez del gobierno”, “la incapacidad de los servicios de inteligencia militar y policial [que] no entenderán el lenguaje de este debilitamiento de la movilización y, en su arrebato de insensata prepotencia... recomendarán a los ministros el apresamiento de los dirigentes de la Coordinadora” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 156); explicaciones subjetivistas que, junto a aquellas que reprochaban al gobierno su “incapacidad de gestión” y “falta de decisión” para imponer el

RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

“principio de autoridad” durante el conflicto de abril, sustituyeron la explicación en términos de correlación de fuerzas por la falibilidad personal: la “incapacidad”, la “tozudez”, “incapacidad de intelección”, etc.; sin evidenciar que estas eran sólo manifestaciones fenoménicas de un hecho más profundo: la crisis política e ideológica de la clase dominante, profundizada por la movilización, que se estaba expresando en las dificultades de los altos mandos para obtener obediencia de una policía, cuyos efectivos se amotinarán en sus oficinas de La Paz, desacatando las órdenes de desocupar la COB, en el marco del estado de sitio que se dictó el 7 de abril.

Las esposas de los uniformados habían ingresado en huelga de hambre a las oficinas de la COB, exigiendo incrementos salariales del 100% para sus esposos. “Se informó que un destacamento de policía, el Grupo Especial de Seguridad se amotinó contra la orden superior de intervenir el piquete de huelga de hambre de las mujeres de los uniformados”⁹⁵. Más tarde, los policías se apertrecharon en las dependencias del Grupo Especial de Seguridad de La Paz, indicando que estaban dispuestos a responder con sus armas si los militares intentaban intervenirlos.

El conflicto profundizó las contradicciones y falta de cohesión al interior de los burócratas estatales, que se hallaban divididos en dos tendencias: una de ellas, que buscaba resolver el conflicto por la vía de la ocupación militar del Departamento de Cochabamba; y otra, que intentaba superarlo mediante la negociación; hechos que, ligados a la huelga policial, determinaron la imposibilidad de aplicar efectivamente el estado de sitio dictado la noche del 7 de abril. Hubo, por tanto, una relación dialéctica entre el potenciamiento de la movilización y las fisuras abiertas en el seno del Estado burgués, que se manifestaron en “errores” del gobierno, incluida su “incapacidad” para efectivizar órdenes, contradicciones entre ministros, órdenes y contraórdenes; que, a su vez, reactivaron la cohesión de la rebelión y, nuevamente, generaron mayor debilidad en el gobierno, un acelerado desarrollo en espiral que definiría en el lapso de pocos días la salida del consorcio Aguas del Tunari y la revisión de la Ley 2.029 en el Parlamento.

Por tanto, decir que si el gobierno hubiera esperado un día más, habría ganado (Gutiérrez, García y Tapia, 2000), es un despropósito. La movilización de los días precedentes había tenido efectos en el seno de la estructura gubernamental, que se expresaban en contradic-

⁹⁵ *Los Tiempos*, 8 de abril de 2000.



LORGIO ORELLANA AILLÓN

ciones, órdenes y contraórdenes de ministros; y estaba siendo aprovechada por la policía, que buscaba obtener incrementos en sus salarios.

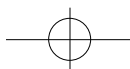
En el transcurso de la tarde del 6, las masas se hallaban, efectivamente, en “estado de militarización”: “Cada barrio, cada comité de aguas comenzó a llegar a la plaza con sus autoridades y estandartes por delante de unas formaciones compactas de jóvenes hombres y mujeres blandiendo palos, botellas, molotovs, piedras y cuchillos. Cada barrio, sindicato agrario y comité de aguas había decidido ir a la plaza a hacer guerra y venía dispuesto para ello. A la una de la tarde 60.000 guerreros compuestos por pobladores empobrecidos de la ciudad y el campo marchaban por las calles céntricas de la ciudad del valle dispuestos a todo” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 157).

Justamente por eso, la *multitud* no se movía por una idea abstracta y prístina de la justicia y la moral, un “fuerte sentido de responsabilidad y observancia de medios en función de fines colectivos” producto de los “nudos de filiación local” “que limita los actos de pillaje o destrucción” (Gutiérrez, García y Tapia, 2000: 158-159); la movilización de abril fue totalmente ajena al moralismo intelectual pequeño-burgués; fue por principio un hecho *ilegal, inmoral* desde la perspectiva de las clases poseedoras. La *multitud*, si requería destruir las calaminas y puertas de los edificios a medio construir, en el centro de la ciudad, para defenderse de las balas militares, armando con ellas barricadas o recogiendo piedras de las construcciones, lo hacía. Las masas, justamente por ese “estado de guerra”, al cual los teóricos de la “forma multitud” se refieren sin entenderlo en realidad, destruyeron el sábado 8 la parte Sur de la unidad policial especializada GES y quemaron ocho motocicletas utilizando bombas molotov y dinamitas⁹⁶; la *multitud*, cubriéndose de las balas con calaminas, arremetió reiteradas veces para tomar la Séptima División del Ejército y armarse⁹⁷; y, finalmente, quemó la ex-Corporación de Desarrollo de Cochabamba.

La solidaridad que respaldaba estos actos y se manifestaba en grandes cantidades de alimentos que los vecinos y comerciantes trajeron al centro de la ciudad para campesinos y jóvenes “guerreros del agua”, el “compañerismo” y la “solidaridad”, la creación de “fines colectivos”, se desarrollaron fundamentalmente en el “campo de batalla”, en la lucha, más que en los “nudos de filiación local”; y si un obstáculo para alcanzar dichos fines hubiera sido “el derecho propieta-

96 *Opinión*, 13 de abril de 2000.

97 *Opinión*, 12 de abril de 2000; *Gente*, 11 de abril de 2000.



RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

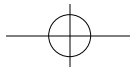
rio”, “instituciones públicas” y “autoridades”, la “multitud” los habría destruido; habría realizado tales “actos de pillaje o destrucción”. Es más, así lo hizo varias veces. Si alguien tan sólo se ha molestado en ver la televisión durante aquellos días, evidenciará que la ciudad parecía haber sido bombardeada.

Ahora bien, lo que debe precisarse es que no se trataba de una turba sin Oriente ni Occidente; eran masas que, sin proponérselo, empezaron a crear un nuevo orden; un nuevo poder que surgía de la ejecución de decisiones a través de la movilización; un hecho que inevitablemente tenía una gran importancia *pedagógica*. En cuestión de días, el pueblo cochabambino aprehendió más sobre solidaridad que en años de asistir a la iglesia para escuchar los sermones del cura; en una semana, empezó a ensayar tácticas militares, para enfrentar al ejército; intentó ganarse a la policía⁹⁸; reconoció quienes eran sus “amigos” y quienes sus “enemigos”; y, lo más importante, empezó a experimentar el control directo del poder, a tomar decisiones colectivamente. Eran las masas populares las que guardaban el *orden público* en la ciudad y la Coordinadora era su máxima representación y autoridad: “Era más o menos las 10 de la mañana cuando un piquete, ubicado en las inmediaciones de la Avenida San Martín, al filo de la ex-Estación de ferrocarriles, interceptó el vehículo de GENTE... ‘Alto, alto’ dijeron, mientras corrían agresivos hacia la movilidad. Un reportero sacó el as que tenía bajo la manga y les enseñó a los bloqueadores un permiso de circulación firmado por los capos de la Coordinadora. ‘Ah, entonces está bien, que pase nomás’ dijeron”⁹⁹.

La autoridad de la Coordinadora nacía de la acción directa de las masas, esa era la manera de “efectivizar” las decisiones asumidas en las asambleas y los cabildos; efectividad que podría entenderse en el mismo sentido de los liberales: “la capacidad para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas” (Linz, 1983); eso mismo reforzaba su legitimidad que, a su vez, fortalecía nuevamente la posibilidad de efectivizar otras decisiones tomadas. Se requería un mínimo de verificabilidad sobre el acato de las decisiones asumidas en las asambleas y cabildos, un principio de “obediencia” a las decisiones colectivamente asumidas; de ahí que el poder de un órgano se asiente sobre su capacidad de convocatoria. Cinco cabildos en el lapso de una semana, que fluctuaban entre 5 mil y 100 mil habitantes, que acudían

98 Ver *Opinión*, 10 de abril de 2000: 4A.

99 *Gente*, 5 de abril de 2000.



LORGIO ORELLANA AILLÓN

al llamado de la Coordinadora, evidenciaban el surgimiento de un nuevo “régimen político” legítimo y efectivo, en el cual las masas gobernaban de manera directa.

La Coordinadora empezó en el conflicto a adquirir los rasgos de una estructura de tipo estatal. Si se dice que las asambleas de la Coordinadora eran una especie de “parlamento popular”, debe añadirse que lo eran durante la movilización de masas y en períodos cortos de tregua, porque en las calles estas comenzaron a inaugurar un órgano de tipo estatal, transformando *de facto* a esa reunión que era producto de los acuerdos dirigenciales que se realizaron allá a mediados de noviembre de 1999 y que también se llamaba Coordinadora, aunque era otra cosa. En la medida en que la Coordinadora era una institución “legítima”, paralela y antagónica al Estado, se abrió un período de “doble poder” en la región, que sólo podía terminar con la disolución de uno de los poderes, por su carácter mutuamente excluyente. Es decir, las posibilidades de la institucionalización real de la Coordinadora como órgano de poder sólo podían culminar con la generalización de abril a otros departamentos y la revolución en un período relativamente corto; o estaba condenada a diluirse.

La caída

Luego del reflujó de las aguas, luego de que campesinos y vecinos de las zonas periurbanas abandonaron el estado de tensión, la Coordinadora perdió su propia base material: campesinos regantes y comités de agua volvieron a gestionar sectorialmente sus necesidades diarias. Era la limitación de la columna vertebral de la Coordinadora, articulada alrededor del problema del agua, base social cuyo contenido de clase se resumía en el gigantesco peso social que tenía la pequeña burguesía en el movimiento: pequeña burguesía agraria, pequeña burguesía comercial, que mayoritariamente se asienta en las zonas periurbanas de la ciudad, pequeña burguesía transportista y artesanal de los barrios periféricos, trabajadores de los talleres clandestinos de los barrios periféricos, que difícilmente encajan en la categoría de “proletarios” y que más bien son subproletarios, “formas en transición” (Borda, 2001) que aún no han adquirido una fisonomía obrera definida. Esa era la base social mayoritaria del movimiento en abril, sobre cuyos cimientos se encumbró una dirección que reproducirá con rasgos acentuados dicho carácter de clase.



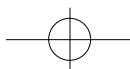
RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

En el nivel de las asambleas de la Coordinadora, de la vanguardia del movimiento, la discusión que se realizaba en la Federación de Fabriles era una lucha por perspectivas, estrategias. Durante la primera etapa de la Guerra del Agua, las asambleas de la Coordinadora y el cabildo de enero habían planteado objetivos que empujaban el movimiento más allá de los intereses de los pequeños propietarios, del agua; y, efectivamente, así sucedió en los días finales de la Guerra del Agua, donde la lucha empezó a plantearse en términos del poder político, derrocar a Bánzer, adquiriendo un carácter secundario el tema del agua; pero tal cosa había sucedido en la lucha.

Algo diferente acontece cuando se inicia una movilización, las masas siempre parten de sus problemas e intereses concretos, hecho que puede negarse dialécticamente en el movimiento, es decir, superarlo incluyéndolo; pero ese es otro momento, el problema está en cómo se hace para iniciar la movilización y se plantea una perspectiva que proyecte el movimiento más allá del orden imperante.

Como decíamos, las perspectivas lanzadas en enero, si bien incluían dichos intereses inmediatos, los objetivos que tales cabildos y asambleas plantearon (expulsión de Aguas del Tunari, anulación de la Ley 2.029 y el paso de la administración del agua a una organización autogestionaria del pueblo), establecían un horizonte de acción; que, empujado fundamentalmente por la fuerza material de los campesinos y la pequeña burguesía urbana, se dirigía al cuestionamiento del orden burgués y, por tanto, a un proceso de maduración que se orientaba a perforar el régimen de las superintendencias y privatizaciones propiciadas por el neoliberalismo en beneficio de los consorcios extranjeros; sacar las transnacionales del país; “expropiar a los expropiadores” (Marx, 1986a), impulso que al unirse con el bloqueo nacional de caminos en septiembre habría consolidado un movimiento a nivel nacional; hecho que sólo podía suceder partiendo de los intereses inmediatos de los sectores en lucha, proyectándolos hacia el cuestionamiento del orden establecido y no de consignas abstractas. Los representantes de la Coordinadora entendían el problema de manera diferente. Ellos buscaban una “reforma” a la Ley 2.029. Razonaban en términos del agua, de manera inmedatista, sin proyección histórica.

En la consiga tan difundida “¡el agua es de todos carajo!”, se reflejaban dos tendencias contradictorias: una corriente que se veía expresada en ella, pues estaba formada por dueños de pozos, vertientes y fuentes de agua; y otra que entendía: “el agua es de todos, sin límites de propiedad”. Puede afirmarse que las pugnas al interior de





LORGIO ORELLANA AILLÓN

las asambleas de la Coordinadora, entre modificar la Ley 2.029 y anularla, sintetizaban la confrontación de ambas tendencias. En la dirigencia de la Coordinadora, se impuso proponer modificaciones, marginando a los radicales de las reuniones. Este hecho sellaría su tumba. Veamos.

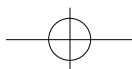
La Coordinadora como tal sólo podía encarar una nueva movilización partiendo del problema del agua, por la naturaleza de su columna vertebral: regantes, comités y cooperativas de agua.

Tales sectores no empezaron la movilización por problemas que no les concernían directamente, sino por el agua. Para el festejo del 1º de mayo, la Coordinadora convocó a una marcha de poca concurrencia; tendencia que se acentuó en septiembre, apenas consolidando bloqueos rurales, pero casi ninguno en la ciudad. Era el ocaso de la Coordinadora.

Hay otro aspecto que debe explicarse. Aunque durante los últimos días del conflicto hubo un acelerado proceso de maduración de los combatientes, quienes empezaron a desarrollar formas militares de combate para resistir a las fuerzas represivas con especies de Estados Mayores, de mandos, en los cuales de manera natural se iban colocando los elementos más decididos del movimiento, este proceso de “selección” en lucha no llegó a la dirección de la Coordinadora, que *no se pulió en las calles*; es decir, los principales dirigentes no fueron removibles, sino que surgieron de los acuerdos dirigenciales entre colegios de profesionales, dirigentes regantes (formados en la escuela de las ONGs y los proyectos de riego), la burocracia sindical de la Central Obrera Departamental y la Federación de Fabriles.

Una dirección de tipo *pequeñoburgués*, que ya desde antes, en los talleres y reuniones, asesorada por profesionales de ONGs, abogados, ingenieros y matemáticos, había ido discutiendo las modificaciones a la Ley 2.029, al margen de las resoluciones del cabildo de enero y las banderas de la movilización de febrero; una dirección que, al momento de levantar el conflicto, proclamó la victoria sin plantear perspectivas al movimiento, para continuar la lucha contra la privatización del agua, que aún no había terminado.

No podían, pues desde meses atrás los dirigentes de la Coordinadora habían ingresado en una contradicción insoluble, en una antinomia. En las Comisiones de Negociación, habían propuesto modificaciones a la Ley 2.029, discusión que luego de la insurrección dio lugar a la Ley modificada 2.066, que salvaba los pozos y las fuentes de agua de los campesinos y eliminaba la exclusividad de los con-





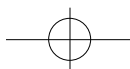
RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

cesionarios en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, dejando intacta la figura de las concesiones, para las grandes empresas, para el capital transnacional.

Una *intelligentzia* de tipo *pequeñoburgués*, adherida desde hace años en el cuerpo social campesino, organizada alrededor de ONGs que realizan proyectos de riego y se especializan en el tema del agua, se limitó a proteger, a través de las modificaciones propuestas en la nueva legislación, la *pequeña propiedad* campesina; sin proyectar la reforma más allá de los límites de la pequeña producción parcelaria y la gran propiedad sobre los medios de producción; es decir, más allá del régimen del capital. No estaba entre sus objetivos, obviamente.

El vacío ideológico dejado luego de abril, por una dirección sin estrategia política, sin vocación de poder, abrió el espacio para un trabajo sistemático por parte de los aparatos de la clase dominante. Campesinos regantes divididos por la acción de la prefectura que recurrió a un proceso de *cooptación*, a través de la inauguración de sistemas de riego financiados por el gobierno; la recuperación de las lealtades locales por parte de las alcaldías provinciales, rotas en abril porque los gobiernos municipales oficialistas se opusieron a las movilizaciones; la reunificación de las Juntas Vecinales bajo las banderas del NFRismo, a través de su método tradicional: la prebenda; el resurgimiento del Comité Cívico; el retorno del Transporte Pesado de Cochabamba al redil NFRista; y un sistemático y persistente trabajo de desprestigio a la Coordinadora, por las autoridades a través de la prensa; que, además de no contar con el respaldo material de las masas en movimiento, al mismo tiempo ratificaba las calumnias lanzándose a aventuras como la organización de una Asamblea Constituyente, sin eco alguno en la población; olvidándose que fue la movilización social que la encumbró y sin la cual nada era, movilización que partió de las necesidades inmediatas de los trabajadores, más que de consignas abstractas, rápidamente confundidas con el oportunismo de otros partidos, que por apetito electoral hicieron suyo dicho objetivo.

La Coordinadora, hoy prácticamente desaparecida del escenario político nacional, empezó a cavar su tumba el mismo día en que se levantó el conflicto; o, probablemente, estaba condenada a perecer, desde el momento en que se formó, por los rasgos políticos e ideológicos de la dirección que empezó las reuniones de dirigentes, allá por los días de noviembre de 1999. Para vencer a la muerte, probablemente tendrían que haberse vencido a sí mismos. Su condición ideológica de clase les impidió hacerlo. Dirigieron un proceso revolucionario, sin





LORGIO ORELLANA AILLÓN

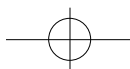
que en sus cabezas estuviera presente tal idea; instrumentos inconscientes de la historia que, a la manera de nuestro ya conocido aprendiz de brujo, conjuran a las fuerzas que después no pueden controlar; ni saben qué hacer con ellas.

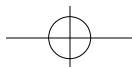
Las características de la lucha campesina de abril en el Valle Central

Los trabajadores del campo y la ciudad no fueron a las calles y las carreteras con una idea racionalmente preconcebida sobre las implicaciones del contrato con el consorcio Aguas del Tunari y la Ley 2.029. “El pueblo sencillo y trabajador” no conocía de dichos documentos, sino a través de sus dirigentes, y a través de las facturas de agua potable incrementadas hasta en un cien por cien que recibieron en la ciudad; hecho que confirmó, a través de la *experiencia*, aquello que inicialmente apareció como denuncia de los representantes de la Coordinadora.

En el Valle Central, la evolución de los campesinos tuvo un rasgo similar, aunque el proceso de maduración fue anterior. Ellos vivieron en el pasado inmediato la *experiencia* de la perforación de pozos, llevada a cabo por SEMAPA y respaldada por la fuerza compulsiva del Estado. Las denuncias de los dirigentes, por tanto, *prendieron* con relativa facilidad. Fue a partir de la experiencia que se desarrolló el conocimiento; proceso inverso al seguido por los asesores profesionales y dirigentes regantes, que *conocían* porque estudiaron el contenido de la Ley 2.029 y el contrato de concesión. Este rasgo del desarrollo del conocimiento durante el conflicto era expresión de una clásica división en las sociedades de clases, que todavía se halla claramente demarcada en Bolivia: la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual; separación que condicionó una determinada dialéctica, entre las diversas clases y capas sociales, durante el desarrollo del conflicto.

En los cabildos, los representantes de la Coordinadora hablaban en el marco de los intereses inmediatos de la multitud, que no quería que se le subiera la tarifa de agua, ni que le pusieran medidores en sus pozos, y quería preservar sus fuentes de agua. En este sentido, no puede afirmarse en términos absolutos que “el pueblo deliberaba y decidía”; así como tampoco que los representantes de la Coordinadora “manipulaban”; podían actuar dentro de un determinado campo de





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

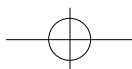
maniobra, que no ingresara en contradicción abierta con las masas, a riesgo de romper la interdependencia entre las direcciones y las bases.

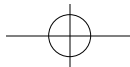
Esta unidad de contrarios, durante el desarrollo del conflicto, experimentó un desarrollo en espiral, propiciando una relativa evolución en la conciencia de las masas; que podía permitir proyectar sus acciones hacia un plano consciente, estableciendo las premisas de un régimen social en el cual el hombre no fuera *reducido al estómago*; desarrollando sus potencialidades, más allá de las ataduras al mundo material, que lo convierten en un ser parcelado, en un pedazo de hombre.

La movilización de abril, en este sentido, tuvo un gran significado “pedagógico”, fue una “escuela” que, sin embargo, no supuso que los actos de las clases oprimidas y explotadas superaran su carácter *instintivo*; aunque estaban empezando a hacerlo. Un ejemplo fueron las comerciantes del mercado, señoras humildes que viven de lo que venden al día y que generosamente repartían el plato de comida de sus hijos, para dárselo a los “guerreros del agua”.

“La universalidad del hombre no radica sólo en su capacidad de pensar, sino también en su capacidad de distanciarse de la urgencia” (Marx, 1989: 30); es decir, se empezaron a proyectar los rasgos más progresivos y humanos de las personas ante el padecimiento colectivo de un mismo problema. Pero también estaba el hecho substancial de que los trabajadores del campo y la ciudad *empezaron* a ensayar mecanismos de deliberación colectiva y autogobierno, que se ejercían a través de las asambleas y los cabildos; y a plantearse el problema del poder político, en los últimos días de la movilización, cuando el agua se convirtió en un problema secundario y empezó a madurar la idea de derrocar a Bánzer, empuñando las armas; hechos notables que, sin embargo, no llegaron a modificar el carácter *inconsciente* en los actos de los “guerreros del agua”. Creer que de la noche a la mañana, los explotados, después de vivir siglos marginados de las decisiones en los asuntos colectivos, preocupados fundamentalmente por garantizar la subsistencia, van a decidir *racionalmente* durante los primeros cabildos que ensayan, es no saber nada de nada. Antes habremos de superar la alienación que se asienta sobre una división del trabajo que nos convierte en personas retaceadas, mutiladas.

En el campo, se acentuó el carácter espontáneo del movimiento, aspecto que tuvo como complemento dialéctico el rasgo fundamentalmente caudillista de la dirigencia. Podemos afirmar que el carácter más o menos democrático de los órganos de poder, que se expresaba en una mayor o menor amplitud del ejercicio de la democracia direc-





LORGIO ORELLANA AILLÓN

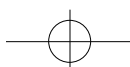
ta, tenía una relación directamente proporcional con la mayor o menor ruptura del particularismo y las lealtades locales, que se construyeron en las zonas rurales de los Valles, donde el sentido de totalidad terminaba en el mercado y los límites de la comarca; y empezaba alrededor de la autoridad del cacique.

Allí, efectivamente, no existe el prejuicio capitalista de la igualdad, sino el juicio precapitalista de la desigualdad (Zavaleta, 1983); la construcción de un canal, un tajamar o la canalización de las aguas de una laguna (ver Salazar, 1999: 80; Gerbrandy y Hoogendam, 1998) son motivo de peleas intestinas entre campesinos, organizados alrededor de sus autoridades de riego, sindicatos agrarios y alcaldías municipales. Allende no existe el mito liberal del poder visible (Bobbio, 1998), sino la generalizada realidad del *poder invisible*: lealtades que se compran con bolsas de habas, gallinas o cualquier producto en medio de fiestas y grandes borracheras; sumisiones que se construyen con revestimientos de pozos y canales¹⁰⁰.

Están ausentes los lazos de adhesión democrática moderna, basada en el compromiso políticamente ético. La posibilidad de que las autoridades municipales exijan obediencia no se asienta sobre la creencia campesina de que estas tienen el derecho de hacerlo, pues han sido legalmente constituidas (Sartori, 1992); sino porque han tejido los lazos de obediencia a través de la prebenda y el *compadrerío*. No existe el credo democrático sobre el cual se asienta la *legitimidad* de una autoridad, por las ataduras materiales y culturales del precapitalismo, que condicionan estructuras mentales localistas, particularistas, ligadas a una relación afectiva con la tierra y el mundo que le circunda, cuya máxima amplitud llega hasta el mercado local. En la mentalidad del campesino, no existe ese “orden legítimo universal” que regularía el comportamiento de individualidades que buscan satisfacer sus intereses privados. Es más, no puede decirse que sea un individuo en el sentido moderno de la palabra.

Una de las premisas de la democracia moderna, “para asistir al parto de las leyes naturales eternas”, fue la separación del productor directo de los medios de producción (Marx, 1986a: 950); la creación del trabajador libre fue el avance más importante que dio el capitalismo en el desarrollo de la individualidad del hombre (Marx, 1986b). El campesino regante del Valle Central de Cochabamba vive los dolores de este desgarramiento, sin que por ello se consume la ruptura, el

100 Entrevista a doña Francisca González de Alcocer (noviembre de 2001).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

desprendimiento radical de la tierra; es más, su lucha es para que tal cosa no suceda. Además, está en la Bolivia del siglo XXI. No son las factorías de Manchester las que lo acogerán, sino el comercio de pequeña escala en Quillacollo. El débil aparato productivo del país no puede cobijarlo.

Al no ser un “orden legítimo” el que guía las acciones del campesino o la adhesión ética a los acuerdos que se toman, es una forma compulsiva la que asumen las decisiones colectivas:

“a horas 15 y 10 se tomó juramento de rigor presenciado por el socio y representante de la H. Alcaldía de Sipe Sipe don Sabino Chacón; después del juramento el nuevo Directorio se pusieron a dirigir la reunión. Donde primero se controló la asistencia al Bloqueo caso semapa. Marcelino Romero y Calixto Marquina dijeron debe pagarse, y Francisco Marquina recalcó debe cumplirse la inasistencia; donde todos los socios por voto de mayoría resolvieron, los faltones, al dicho bloqueo pagarán la suma de 20 Bs”¹⁰¹.

En el caso de los bloqueos de enero, febrero y abril de 2000, las comunidades del Valle Central definieron cobrar multas a quienes inasistieran a las medidas de presión; e, incluso, en algunas se definió cortarles el agua: “No le daban su agua. Le cortaban su agua”¹⁰².

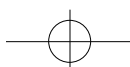
El control de asistencia a los bloqueos y actos de presión, realizado a través de listas por los delegados de agua, es una más de las formas compulsivas que asume el *derecho* en las organizaciones de riego del Valle Central; la forma en que los intereses y sentimientos individuales se hallan subordinados a los intereses colectivos de la comunidad, que se sintetizan en la defensa de los usos y costumbres, “una conformidad de todas las conciencias particulares hacia un tipo común” (Durkheim, 1993: 133). Así, en el pozo Crucero de la comunidad de San Jorge, en Vinto: “Los del pozo nos amenazaron con no darnos agua de riego. Si no asisten a la defensa de sus usos y costumbres, se castigará con agua. Sector por sector, llevábamos nuestra lista al de agua... ese es el faltón, que no ha venido, y se castigaba de esa manera”¹⁰³; y en una cooperativa de agua de San Jorge: “se le cortaba el agua al que no venía”¹⁰⁴.

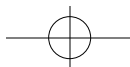
101 Libro de Actas de la Comunidad de Mallico Ch'api: 16-17; respetamos su ortografía.

102 Entrevista a Evaristo Almanza, juez de Aguas de la Cuenca del río Viloma, Viloma (15 de noviembre de 2001).

103 Entrevista a doña Francisca González de Alcócer (noviembre de 2001).

104 Entrevista a César Peláez, joven “Guerrero del agua” de la comunidad de San Jorge, Vinto (noviembre de 2001).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

Ahora bien, *el derecho represivo* va a tener lugar allí donde el *crimen* ha dañado a la conciencia colectiva. “Eso es verdad, porque cuando estábamos en un cabildo... si le iban a agarrar al Alcalde de Vinto, le iban a asesinar por que ha ido contra lo que reclamaban. Se ha hecho humo”¹⁰⁵. Al finalizar la “Guerra del Agua”, los campesinos de Morochata, comunidad ubicada al Norte de Vinto, procedieron a la búsqueda del alcalde, el segundo hombre en el Departamento del partido gobernante Acción Democrática Nacionalista, que se opuso a las demandas de los campesinos.

Sin embargo, no es posible definir lo precedente en términos categóricos, como el carácter del derecho punitivo de una sociedad basada en la *solidaridad mecánica*. Si bien existen algunos rasgos, a las formas de conciencia social descritas se fusiona la tradición sindical de los campesinos, visible en el conflicto. Durante el desarrollo de los bloqueos, se realizaron cinco cabildos bajo la pasarela de Vinto, en media carretera. Allí se escogían a los *policías sindicales*, autoridades que “controlaban a la gente, si se han desviado o se han ido... la gente reunida allí, ellos mismos nombraban”¹⁰⁶.

En el Valle Central, existían bloqueos salpicados en la entrada a Viloma, Mallcochapi, Pirwas y en los puentes del camino a La Paz, organizados por cada comunidad y de manera rotativa. En una Cooperativa de Agua formada por ciento sesenta usuarios de la comunidad de San Jorge, al interior de la jurisdicción de Vinto, por ejemplo, “la mitad atendía de día y la mitad de noche”¹⁰⁷. De la misma forma, los usuarios del pozo Crucero ubicado en la entrada a Viloma, formado por ciento treinta usuarios, se organizaron en grupos rotativos que bloqueaban cada seis horas durante las veinticuatro horas del día. “En la entrada a Viloma es donde está el pozo. Ahí es donde nos hemos parapetado. Vinieron la gente de un lado, de otro lado”¹⁰⁸.

Los vecinos de la mancha urbana de Vinto preparaban la comida. “Hemos ido a pedir víveres a todos los comunarios de San Jorge y con eso hemos comido durante una semana... Los campesinos comían en fila”¹⁰⁹ y durante la noche dormían en las laderas del camino, sobre el pasto. Había, efectivamente, una suerte de división del trabajo fun-

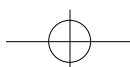
105 Entrevista a Evaristo Almanza (noviembre de 2001).

106 Entrevista a Evaristo Almanza (noviembre de 2001).

107 Entrevista a César Peláez (noviembre de 2001).

108 Entrevista a doña Francisca González de Alcócer (noviembre de 2001).

109 Entrevista a Renán Jiménez, joven “Guerrero del agua” de la comunidad de San Jorge, Vinto (noviembre de 2001).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

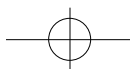
cional al conflicto, que partía de la organización comunitaria. Los dirigentes regantes y vocales de las organizaciones de riego, pasaban comunidad por comunidad, piquete por piquete, para informar y organizar el fortalecimiento de más bloqueos.

Sin embargo, sin que se perdiera la consistencia que partía de la organización a nivel comunal, en el movimiento se fueron *despintando* los límites que diferenciaban a una organización de otra, unas funciones de otras. Las masas “transmiten noticias, recogen rumores y se convierten en un ser colectivo dotado de innumerables ojos, oídos y tentáculos” (Trotsky, 1985: 116). De ahí que sea impreciso hablar en general de una “forma sindicato de la movilización social” (García, 2001); o, en este caso, tentarnos con identificar una “forma regante” de la movilización social. Si bien el conflicto partió de dicha base material y organizativa en el campo, los contornos de dichas organizaciones, sus *formas*, se *desdibujaron*, perdiendo sus límites tradicionales, ante la incorporación de los sectores más diversos, ajenos a dichas *formas* organizativas.

Las organizaciones, para no quedar a la zaga del movimiento, convirtiéndose en un obstáculo, más que en un instrumento de movilización, se ven obligadas a flexibilizar su estructura organizativa; a transformarse en algo diferente a lo que son en períodos de relativa estabilidad, donde organizan la distribución y el abastecimiento del agua, no la lucha con el ejército, para dar un ejemplo. Ese es al fin de cuentas uno de los rasgos de los órganos de poder: grandes *bolsones* que en movimiento envuelven a los más variados sectores de los colores más diversos; algo que un comité de aguas o una organización de riego no hace en períodos normales, por el simple hecho de que la mayoría de la sociedad no se organiza en tales instituciones. De todas maneras, es importante precisar que en abril tales *bolsones* surgieron a partir de una base material: las organizaciones campesinas de riego y los comités y cooperativas de agua; organizaciones sin las cuales no había abril. La cuestión es que por sí mismas tampoco eran abril. Eran la base, no la condición del órgano de poder; eran la *columna vertebral*, no la totalidad del *organismo*.

La dialéctica de la organización en movimiento es diferente a la dialéctica de la organización en períodos de relativa estabilidad. “Nuestros hijos se molestaron cuando lanzaron los gases. Los rodearon a los doce soldaditos, quisieron quitarles sus armas”¹¹⁰. Durante la

110 Entrevista a Evaristo Almanza (noviembre de 2001).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

movilización las organizaciones se enfrentan con problemas para los cuales no fueron hechas. Si las masas pudieron derrotar militarmente en ciertas oportunidades al ejército, no fue porque sus organizaciones estaban hechas para eso, sino por que aprendieron a hacerlo en las diversas escaramuzas en que se vieron envueltas. “En Viloma una multitud cercó a doce soldaditos que estaban a punto de llorar”¹¹¹; “nosotros somos mandados por el gobierno, nosotros no somos culpables”¹¹² decían, cercados por la multitud enfurecida.

Esa era la percepción sobre la debilidad del contendiente. Y es que la multitud no se estaba enfrentando a un ejército fuertemente armado sino a jóvenes conscriptos mal alimentados, también hijos de campesinos, que en algunos casos se encontraban desarmados. “Cuando los gases vomitivos llegaron a los soldaditos, sólo hacían arcadas sin vomitar nada, porque no habían comido.... Al regimiento Camacho de Oruro lo han traído limpiando los caminos, los soldaditos con sus poleritas, sólo con palos para defenderse”¹¹³. Los momentos de debilidad de las fuerzas represivas potenciaban la cohesión de la movilización.

La fortaleza de la movilización campesina, si bien emergió de las organizaciones de riego, fue *sobredeterminada* por la lucha, que se construyó en la historia, a lo largo de sus enfrentamientos contra la perforación de pozos; se reforzó en el acto; fueron moléculas desparrramadas en el ambiente, que durante el calor de la refriega entraron en punto de fusión; una fuerza centrípeta que en movimiento contrarrestaba las tendencias centrífugas del campesinado, cuando este se hallaba labrando la tierra, cercado por los límites de la comunidad. Actuaba como clase a nivel regional.

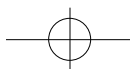
Pero afirmar tal cosa es referirse a lo que el campesino, aun en movimiento, no ha dejado de ser; y es aquí donde engarzamos con un punto que hemos dejado suelto más arriba. El carácter menos democrático de la movilización social campesina, que se expresaba en una menor deliberación directa de las bases en los asuntos comunes; en una menor amplitud de la democracia directa de los órganos de poder, su carácter cupular a nivel decisonal.

Durante el desarrollo del conflicto de abril, la Federación de Regantes convocó reiteradas veces a cabildos, en los pueblos de El Paso, Vinto, Sipe Sipe, donde los campesinos acordaban las medidas a

111 Entrevista a Renán Jiménez (noviembre de 2001).

112 Entrevista a Evaristo Almanza (noviembre de 2001).

113 Entrevista a Renán Jiménez (noviembre de 2001).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

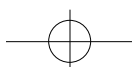
seguir. Sin embargo, “sobre todo las decisiones de las modificaciones a la Ley... Sobre ‘Aguas del Tunari’, más han salido de los seminarios y talleres que han organizado la federación... yo creo que la forma de las movilizaciones, el logro de los objetivos siempre se lo ha tomado en seminarios y talleres a través de las organizaciones de Riego”¹¹⁴.

Las decisiones no eran asumidas fundamentalmente en los cabildos sino en las reuniones, seminarios y talleres de dirigentes y *expertos* en los asuntos de riego. Esa era la *intelligentzia* del movimiento en el campo. Las decisiones asumidas no bajaban para ser puestas en consideración, sino fundamentalmente para ser aprobadas y asumidas a través de la organización de la movilización. “El dirigente nos ha dicho”, “el dirigente nos ha informado”, son afirmaciones que reflejan una estructura organizativa de tipo caudillista, donde las decisiones vienen de arriba hacia abajo; el escenario donde grupos de *especialistas* y *expertos* en el tema del agua plantean las modificaciones que creen convenientes a la Ley 2.029.

Ahora bien, esta forma de autoridad no se ejerce impunemente. Las decisiones tomadas en los seminarios y talleres, para ser asumidas como decisión de *todos*, tenían como límite y condición los intereses materiales creados alrededor de la pequeña producción parcelaria y los sistemas de riego del Valle Central; es más, dichas decisiones cupulares tomaron la forma de ser las *decisiones de todos*, justamente porque se plantearon la defensa de los usos y costumbres de los campesinos de los Valles de Cochabamba. Y es que se puede afirmar que quienes participaban de esa *intelligentzia pequeñoburguesa* hacían de intelectuales orgánicos del pequeño productor parcelario; intelectuales que en las Comisiones de Negociación defendían a capa y espada las fuentes de agua de los regantes y, en este sentido, la pequeña parcela del campesino. Puede decirse que estos profesionales, formados en la escuela de las ONGs, y los dirigentes regantes expresaban a cabalidad los intereses de los pequeños productores parcelarios; actuaban en el marco de la autonomía relativa que les ofrecía la pequeña producción parcelaria.

Y es eso, junto a los resultados objetivos del conflicto de abril (los 36 artículos modificados a la Ley 2.029 y la expulsión de Aguas del Tunari), lo que evidencia los obstáculos y posibilidades de la movilización campesina regante; los *límites* de la historia que ellos *pueden* construir por sí mismos; que, en último término, son las fronteras

114 Entrevista a Omar Fernández (20 de febrero de 2001).





LORGIO ORELLANA AILLÓN

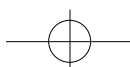
impuestas por la dimensión de la comunidad y la parcela, de las fuentes de agua y los usos y costumbres; *el límite de la movilización campesina regante es la misma condición campesina.*

Antes de abril, las comunidades y organizaciones campesinas eran vulnerables a la intervención de concesionarios, si es que se encontraban en una zona concesible o susceptible de ser definida como tal; de tal forma que sus fuentes de agua no se hallaban garantizadas (Fundación Solón, 2000: 4). El impulso de la movilización campesina regante, orientado por los especialistas en cuestiones de agua, fundamentalmente, cambió la figura de las concesiones (que debían ser otorgadas por la Superintendencia de Saneamiento Básico y Alcantarillado) por las autorizaciones y los registros colectivos, que garantizaban seguridad jurídica a los titulares de los sistemas de agua, durante el período de la vida útil del servicio; la movilización eliminó la exclusividad de la gran empresa concesionaria, garantizando “la prestación de servicios de agua potable de juntas vecinales, comités de agua y pequeñas cooperativas en Zonas Concesibles” (Fundación Solón, 2000: 5) sin que por ello debieran transformarse en empresas privadas; y se estableció que para la aprobación de las tarifas de agua, la Superintendencia debía “informar y recibir la opinión técnicamente fundamentada de los Gobiernos Municipales y las instancias de la Participación Popular” (Fundación Solón, 2000: 12).

Con relación a las fuentes campesinas de agua, la nueva ley protegía los *usos y costumbres* de la acción de futuras empresas concesionarias; delimitaba las fronteras en las cuales el capital transnacional y la Superintendencia no entrarían: “Se aclara que la intervención por parte de la Superintendencia de Saneamiento Básico y el pago de la tasa de Regulación es sólo para titulares de concesión” (Fundación Solón, 2000: 12); es decir, había logrado que los lugares donde los campesinos tuvieran fuentes de agua no fueran zonas concesibles. Si se respetara tal cosa, podrían tolerar la existencia de *titulares de concesión*. Algunos de los intelectuales de tal conquista lo ratifican: “la situación es mucho más favorable para la población y de menos impunidad para la Superintendencia y las empresas concesionarias” (Fundación Solón, 2000: 11).

Los pequeños propietarios pueden convivir con los grandes propietarios, en la medida en que estos últimos sean *menos impunes*; así, “la situación es mucho más favorable”.

“Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeños bur-





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

gueses en modo de vida; que, por tanto, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan a aquellos, prácticamente, el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe entre los *representantes políticos y literarios* de una clase y la clase por ellos representada” (Marx, 1981; subrayado en el original).

Consideraciones finales

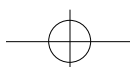
Al final del conflicto, cuando los campesinos de Morochata recorrieron los piquetes de bloqueo salpicados a lo largo del camino, pidiendo ayuda a los dirigentes regantes de otras comunidades para *ajusticiar* al alcalde de Vinto; una vez aprobadas las modificaciones a la Ley 2.029 en el Parlamento, los campesinos levantaron los bloqueos y retornaron a sus comunidades, dando la espalda al llamado de las alturas del Valle Central¹¹⁵. Un día antes, el 10 de abril, los campesinos de los Valles habían resistido levantar los bloqueos, mientras no se modificara la Ley 2.029: “La gente en el cabildo han dicho, primero ver los documentos firmados, o si no, no hay nada”¹¹⁶. Mientras que en el Valle Alto, la sola proposición de levantar un bloqueo en Colomi casi costó la vida de un dirigente: “Cuando les propuse levantar el bloqueo de caminos, mis compañeros me han silbado y estuvieron a punto de matarme en el mismo lugar. Después de mi intervención, las bases me han hecho corretear por Colomi, gracias al ejército estoy con vida”¹¹⁷.

Durante la movilización, la cohesión de la protesta campesina tendía a limitar el margen de maniobra de los caudillos campesinos. Los bloqueos eran lugares de control e información que estrechaban el campo de acción de los dirigentes. La dirección del proceso fue diametralmente opuesta en estado de distensión. Si en septiembre de 2000, en el contexto de un bloqueo campesino nacional, los campesinos de las alturas y los vecinos estuvieron a punto de tomar la alcaldía, pues la autoridad había permitido el paso de militares ocultos en ambulancias e impedido que los heridos y muertos de la balacera militar que salió de dichas ambulancias fueran cobijados en el hospital, en noviembre de 2001, una huelga de hambre de concejales muni-

115 Entrevista a doña Francisca González de Alcocer (noviembre de 2001); entrevista a Evaristo Almanza (noviembre de 2001).

116 Entrevista a Evaristo Almanza (noviembre de 2001).

117 *Los Tiempos*, 11 de abril de 2000.





LORGIO ORELLANA AILLÓN

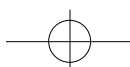
cipales y miembros del Comité Cívico Provincial en las oficinas ediles, que exigía la expulsión del mismo alcalde por actos de corrupción, estuvo a punto de ser desalojada a palos por una turba campesina, organizada y sobornada por personeros de la misma alcaldía.

Una sistemática fractura de los vínculos establecidos en la lucha se llevó a cabo después de abril y septiembre de 2000. Dirigentes corrompidos, lealtades prebendales reconstruidas; sumisiones y subordinaciones compradas por partidos políticos. A mediados de noviembre de 2001, la Coordinadora y la Federación de Regantes convocaron a una nueva movilización regional; esta vez, para apoyar el bloqueo campesino cocalero y exigir la disminución de las tarifas de luz y energía eléctrica, demasiado elevadas para los pozos de agua, las tiendas y casas rurales, a las que se les cobra igual cantidad de dinero por kilowatt que a empresas, casas de zonas residenciales y grandes tiendas de la ciudad. El día programado por la mañana no se realizó bloqueo alguno. Débiles intentos aislados aparecieron al mediodía.

Los dirigentes campesinos, que en medio de la lucha tenían un estrecho margen de maniobra, vieron sus manos, una vez más, desatadas durante un largo período de relativa estabilidad. En aquellas amplias extensiones de los valles, donde las comunidades se hallan separadas por kilómetros, y donde el único nexo entre ellas son las reuniones para el desarrollo del trabajo colectivo alrededor de los sistemas de riego, se volvieron a tejer los antiguos nexos y vínculos que condicionan la sumisión de los campesinos a las autoridades locales; hecho que no elimina las posibilidades de nuevas rupturas. Finalmente, *las luchas de clases son historias de subordinación e insubordinación permanentes.*

La experiencia regante en los valles muestra que sólo en momentos límite, es decir, cuando de manera flagrante se pone en riesgo la subsistencia de la condición campesina en su conjunto, la comunidad sale de su aletargamiento, vivido entre los límites de la comarca y el mercado, abriéndose la posibilidad de superar el particularismo y el localismo; característica del movimiento campesino boliviano, que hasta hoy no ha podido consolidar una dirección de carácter nacional como consecuencia de las disputas entre caudillos regionales. En momentos de tensión, cuando la comunidad se juega la subsistencia y además tiene noción de ello, desmarcarse puede costarle al dirigente ser despedazado por los comunarios.

Pero hay otra cosa que también enseña la experiencia de la “Guerra del Agua” en el Valle Central de Cochabamba. Cada vez de



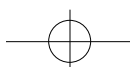


RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

manera más acentuada, los problemas del campo se hallan condicionados al curso que estos siguen en la ciudad; es decir, que la solución a la contradicción campo-ciudad pasa nuevamente por una alianza entre los campesinos y los trabajadores urbanos. La unidad entre las provincias y la urbe cochabambina expulsó al consorcio Aguas del Tunari y preservó las fuentes de agua de los campesinos, los comités y las cooperativas de la ciudad; perforó el modelo neoliberal. Fue, sin embargo, en un cabildo de alrededor de 100 mil personas en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, donde se definió levantar las medidas de presión; autoridad política de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y sus asambleas, durante todo el conflicto, que en el plano superestructural manifiestan las condiciones materiales sobre las cuales se desarrolla la mecánica de clases en este país: la subordinación general de las más diversas formas sociales de producción por el capital; condición estructural que en el desarrollo histórico permite entender las posibilidades y limitaciones de las diversas clases sociales para proponer y ejecutar la transformación del régimen capitalista; para identificar una tendencia revolucionaria, darle forma programática y empujarla hasta el final. Los campesinos regantes y sus direcciones, desarmadas de una política revolucionaria, no pudieron hacerlo.

La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de febrero y abril, un órgano de poder, es “la forma política, al fin descubierta, para llevar dentro de ella la emancipación del trabajo” (Marx, 1973), expulsando a las transnacionales, socializando la producción y liberando al campesino de las ataduras materiales y culturales que lo someten a desarrollar toda su vida un trabajo bestial, *para subsistir*. Pero un programa de socialización a través de esa “forma política”, que contenga tales reivindicaciones campesinas, es una perspectiva que históricamente ha correspondido a una clase social de distinto tipo. Fueron los obreros quienes, a través de sus luchas, la forjaron.

Hay un momento preciso de quiebre en las barreras culturales locales que constituyen el particularismo campesino regante: el momento en que el alcalde o la empresa extranjera quieren hurgar sus fuentes de agua y su terreno; ese es el punto crítico que abre un abanico de posibilidades para proyectar la fuerza material del campesino fuera de los límites de la comarca y fuera de los límites del capital.



Bibliografía

- Assies, Willem 2000 *David fights Goliath in Cochabamba: Water rights, neoliberalism and the renovation of social protest in Bolivia* (Zamora Michoacan: Colegio de Michoacan, Centro de Estudios Rurales).
- Bartra, Armando 1979 *La explotación del trabajo campesino por el capital* (México: Editorial Macehual).
- Bobbio, Norberto 1998 *El futuro de la democracia* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Boelens, Rutgerd y Davila, Gloria 1998 *Concepciones sobre justicia y equidad en el riego campesino* (Assen, Los Países Bajos: Van Gorcum).
- Borda, Alexander 2001 *Factores productivos y formas que asume la lógica de reproducción de los talleres de confección en transición. El caso de Huayrak'asa* (Facultad de Economía, UMSS).
- Bustamante, Rocío 1997 *De las permanencias y los cambios en las organizaciones de riego y el modelo boliviano de descentralización* (Wageningen: Agricultural University).
- Castells, Manuel 1998 *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad* (Madrid: Alianza Editorial), Vol. 2.
- CLACSO 2000 *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO), septiembre.
- Crespo, Carlos 2000 *"El pueblo sencillo y trabajador": la coordinadora como nuevo movimiento social* (Cochabamba: CESU-UMSS).
- Dinar, Ariel 2000 *The political economy of water pricing reforms* (World Bank).
- Durán, Alfredo, Hoogendam, Paul y Salazar, Fernando 1998 "La problemática del agua subterránea en el Valle Central de Cochabamba" en *Procampo. Revista del desarrollo rural* (Bolivia: CID), N° 82, septiembre.
- Durkheim, Emile 1993 *La división del trabajo social* (Buenos Aires: Planeta-Agostini), Vol. I.
- Fernández, Omar 2000 *El Agua-Conflicto en el Valle Central. Pandoja y Llauquinquiri, comunidades en permanente conflicto* (Cochabamba: mimeo), febrero.
- Foucault, Michel 1995 *La arqueología del saber* (México: Siglo XXI Editores), 16° edición.
- Fundación Solón 2000 *Modificaciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Aprobado*. Carta informativa sobre temáticas rurales, Boletín N°5, abril.
- García, Álvaro 2001 "Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia" en *Tiempos de rebelión* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).

RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

- Gerbrandy, Herben y Hoogendam, Paul 1998 *Aguas y Acequias. Los derechos al agua y la gestión campesina de riego en los Andes bolivianos* (La Paz: Plural).
- Gordillo, José M. 2000 *Campesinos revolucionarios en Bolivia. Identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba 1952-1964* (La Paz: Plural Editores).
- Gutiérrez, Raquel, García, Álvaro y Tapia, Luis 2000 "La forma multitud de la política de las necesidades vitales" en *El retorno de la Bolivia plebeya* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Honorable Congreso Nacional 1999 "Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado" en *Opinión* (Cochabamba), 22 de octubre.
- Laserna, Roberto 2001 *Conflictos sociales y movimientos políticos en el año 2000* (Cochabamba: CERES).
- Lenin Vladimir Ilyich 1987 "La dualidad de poderes" en *Obras escogidas II* (Moscu: Editorial Progreso).
- Lenin Vladimir Ilyich 1987. "El Estado y la revolución" en *Obras escogidas II* (Moscu: Editorial Progreso).
- Linz, Juan 1983 *El quiebre de las democracias* (Madrid: Taurus).
- Lora, Guillermo 1998 *Obras Completas*, Tomo IV (La Paz: Masas).
- Marcuse, Herbert 1971 *Razón y Revolución* (Madrid: Alianza Editorial).
- Martínez, José 1996 *Municipios y Participación Popular: Un modelo de desarrollo en América Latina* (La Paz: Semilla).
- Marx, Karl 1973 "La lucha de Clases en Francia" en *Obras Escogidas II* (Moscu: Editorial Progreso).
- Marx, Karl 1981 "El 18 Brumario de Luis Bonaparte" en *Obras Escogidas III* (Moscu: Editorial Progreso).
- Marx, Karl 1985 *El Capital*, Tomo I, Volumen I (México: Siglo XXI Editores), 15° edición.
- Marx, Karl 1986a *El Capital*, Tomo I, Volumen III (México: Siglo XXI Editores), 12° edición.
- Marx, Karl 1986b *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858* (México: Siglo XXI Editores), 14° edición.
- Marx, Karl 1989 *Manuscritos. Economía y filosofía* (Madrid: Alianza Editorial).
- Milenio 2001 *Informe político del año 2000* (La Paz: Fundación Milenio).
- Quijano, Aníbal 2000 "Los movimientos contemporáneos en América Latina" en *Observatorio Social de América Latina* (CLACSO), septiembre.
- Rudé, Georg 1981 *Revolución popular y conciencia de clase* (Barcelona: Editorial Crítica).



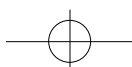
LORGIO ORELLANA AILLÓN

- Salazar, Fernando 1997 *Autoridades locales en el sistema de riego Sayt'uqocha* (Wageningen: Agricultural University).
- Salazar, Fernando 1999 "Gestión de agua en el municipio de Sipe Sipe" en *Aguas y Municipios* (La Paz: Plural).
- Sartori, Giovanni 1992 *Partidos y sistema de partidos* (Madrid: Alianza Editorial).
- Savedoff, William y Spiller, Pablo 1999 *Spilled Water. Institutional Commitment in the Provision of Water Services* (New York: Inter-American Development Bank).
- Thompson, E. P. 1979 *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial* (Barcelona: Editorial Crítica).
- Trotsky, León 1985 *Historia de la Revolución Rusa* (I) (Madrid: Sarpe).
- Vargas, Gonzalo 2000 "Condiciones del desarrollo agropecuario y la demanda de riego en el Valle Central" en *La gestión integral del agua en Cochabamba* (La Paz), Foro electrónico organizado por la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Cochabamba, CGIAC, y el Consorcio para el Desarrollo Sostenible en la Ecorregión Andina, CON-DESAN, febrero/abril.
- Zavaleta Mercado, René 1983 "Las masas en noviembre" en Zavaleta Mercado, R. (comp.) *Bolivia, hoy* (México: Siglo XXI Editores).

Otras fuentes

Entrevistas citadas

- Félix Aguirre, juez general de Aguas de la Cuenca del río Viloma, Viloma, (20 de febrero de 2001).
- Omar Fernández, secretario general de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba, Cochabamba, (20 de febrero de 2001)
- Doña Francisca González de Alcocer, usuaria del pozo Crucero y la cuenca La Llave, Vinto, (noviembre de 2001).
- Félix Guzmán, juez comunal de Aguas de la Comunidad Pirhuas, Cochabamba, (20 de febrero de 2001).
- Renán Jiménez, joven "Guerrero del agua" de la comunidad de San Jorge, Vinto, (noviembre de 2001).
- César Peláez, joven "Guerrero del agua" de la comunidad de San Jorge, Vinto, (noviembre de 2001).
- Guillermo Savedra, tesorero de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba, Cochabamba, (febrero de 2001).





RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

Diarios y documentos consultados

Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida 2000 *Cuando el pueblo perdió el miedo* (dossier) (Cochabamba).

Gente; La Prensa; Los Tiempos; Opinión.

Libro de Actas de la Comunidad de Mallco Chapi, 11 de abril de 1998.

